

Cultura para la Esperanza

AÑO 2021 – Depósito Legal S.1135-1998 – Imprime KADMOS

n. 116



Sumario

Reseña Libro. Teología en las periferias

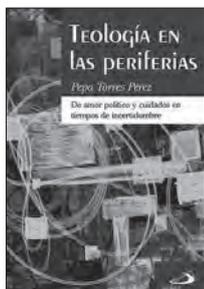
MISCELÁNEA

El virus de las desigualdades	1	Desafiar la supuesta superioridad moral de las corporaciones "Big Tech"	30
Consecuencias de que el agua cotice en el mercado de futuros	9	<i>Bossware</i> : un recorrido por las aplicaciones de vigilancia en el teletrabajo	34
Jurisdprudencia para proteger el derecho humano al agua.....	12	Trabajadores de Amazon luchan para formar su primer sindicato	39
¿Queremos vacunas rápido? Suspendamos los derechos de propiedad intelectual.....	15	Las estrellas solo se ven en la oscuridad	41
Víctimas de la guerra económica y coronacrisis.....	18	La Renta Básica, una alternativa inevitable a las políticas fallidas contra la pobreza	44
La desigualdad, el racismo y la polarización: las grietas que encumbraron a Trump	22	NOTICIAS BREVES	46
La guerra del Sahara y las armas españolas	25	Reseña Cine. Adú.....	47
		Testimonio. Colette Kitoga: "Madre de huérfanos y viudas"	48

Instrumento de análisis de la realidad de **«acción cultural cristiana»**

C/ Sierra de Oncala, 7-bajo dcha. — 28018 Madrid. — Tel: 630 75 44 24 — e-mail: acc@eurosur.Org

Teología en las periferias



De amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre

Pepa Torres
Editorial San Pablo
Comunicación
2020

Sobre *Teología en las periferias*, el nuevo libro de Pepa Torres
María Antónia Bogóñez Aguado
Cristianismo y Justicia / 20 Enero 2021

Leer un libro de la Pepa Torres siempre me trae un regusto a vida, me hace sentir un frenesí de actividad, me conduce a una profundidad que se traduce en la acción. Y es que su última obra, "Teología en las periferias. De amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre", nos traslada a las fronteras en las que vive, a los territorios físicos y espirituales donde encuentra a sus hermanos y hermanas..., y nos abre a brechas por la que intuirlos, incluirlos en nuestra oración, y dejarnos interpelar como si fueran detectores de la propia instalación.

Por si no conocéis a Pepa, ella se presenta en las primeras páginas del libro. Brevemente, una mujer que hace años que milita por el Reino con diversas concreciones: religiosa Apostólica del Corazón de Jesús, de espiritualidad ignaciana, sabiéndose y agradeciendo ser mujer, feminista, teóloga, educadora, acompañante de personas y sus procesos, vecina de Lavapiés (Madrid) donde lucha con el vecindario en todo tipo de relaciones inter (inter raciales, interculturales, interreligiosas...) y donde reside en una comunidad intercongregacional (compañeras de diferentes congregaciones y una laica)... Una mujer que está alerta, a quien la vida le mueve por dentro y que desde la experiencia hace teología, que vive la acogida, la amistad, la relación, el activismo, el discernimiento...

Y el libro nos permite recorrer esa manera suya de vivir, a la que el Evangelio le ha conducido... A hacer que vida y oración vayan de la mano. ¿Podría ser más evidente su espiritualidad ignaciana? Y las páginas se llenan de nombres de personas y colectivos: teólogas y teólogos que le han sido sus guías, mujeres amigas de todos los orígenes y condiciones, vecinos y vecinas, pero también grupos en los que descubrir a Dios encarnado (luchas vecinales, los manteros, Territorio Doméstico, la Red Miriam, la Revuelta de las Mujeres, la vida religiosa...).

El primer capítulo nos acerca a Pepa, a su historia y a sus ejes. La palabra es un don suyo y que le permite incluso crear expresiones que se llenan de fuerza cuando nos presenta los nombres e imágenes del que es para ella el misterio: *Dios compañera* que se identifica y recrea los anhelos de las mujeres, la *Sophia* que nos habita, un Dios que adopta denominaciones de otras religiones y hasta de luchas laicas por la dignidad humana... Un *Dios todocuidadoso*. Un Dios presente en todo ser humano y especialmente en los más desvalidos. En ellos y ellas, Dios tiene rostros. Unos rostros que mueven a comprometerse y a amar. **Un Dios relación, un Dios que se encuentra desde dentro, desde abajo, en el silencio y en la acción.**

Y es esta presencia viva de Dios que la lleva a las periferias, a las fronteras, al amor político. Sí, porque Pepa ha vivenciado que, como dice el feminismo, todo lo que es personal es político... Y si nos importan las personas, si las quieres, también te

comprometes en el cuidado de los cuerpos, de la comunidad, de la polis...

Las periferias y las fronteras las veremos, podremos acercarnos a ellas, si cambiamos la mirada, si la educamos. Cómo ayuda contemplar cómo miraba Jesús, cómo observa hoy Jesús nuestro mundo, el sufrimiento, la injusticia... pero también las rendijas de luz, solidaridad y compromiso. Y el libro nos da pistas para abrir nuestros párpados, para coger impulso y arriesgarnos para ir hacia los márgenes, para no evitar el camino donde hacernos cargo, cargar y encargarnos de quien va cayendo malherido, vulnerado, explotado y violentado. La misericordia y la acogida como rasgos que nos han de caracterizar a quienes decimos seguir a nuestro hermano Jesús... Ojos limpios, horizontes amplios, vislumbrando lo más pequeño, abiertos a la esperanza...

Como decíamos, Pepa es religiosa y dedica el tercer capítulo a la vida religiosa. Interpeladora, llama a la profecía que siempre ha supuesto la vida consagrada, pidiendo arriesgarse y recuperar sensibilidad y praxis... **Una vida religiosa implicada en la realidad, a la que nada humano le es ajeno, como le sucedía a Jesús...** Una vida religiosa "en salida", tal como el papa Francisco nos invita a vivir a todas las comunidades cristianas y a todos los creyentes. Algunos de los puntos que plantea pueden servirnos para hacer un chequeo de la situación de nuestros grupos, comunidades, vidas personales, seamos o no religiosos.

Hace un análisis de las personas cristianas que están sin Iglesia, que se han alejado de ella y hace propuestas de reencontramiento. Todos conocemos algunas de ellas, quizás algunos de los propios lectores y lectoras de este blog... Hay que hacer camino y recorrerlo con espíritu de encuentro, de aprendizaje mutuo, de humildad por todos lados...

El cuarto capítulo nos abre a la deuda pendiente que tiene la Iglesia con las mujeres. Nos habla de una revolución de los cuidados: ahora que hablamos tanto de la necesidad de los cuidados sean una tarea de todos, más allá de su feminización, porque poner la vida en el centro es un elemento indispensablemente humano, al que la economía y el patriarcado han reducido al ámbito femenino.

Preciosa la lectura que Pepa hace del pasaje de Agar y Sara, haciendo de la primera imagen de la mujer esclava y migrante que es sujeto de liberación. A lo largo del libro, la autora nos había ido dibujando otros textos bíblicos para ella importantes: Puá y Sifrá, la hemorroísa, la samaritana, el ciego Bartimeo, la parábola del buen samaritano... Se nota cómo han ido desvelándose dimensiones desde la contemplación de los fragmentos en oración.

Se visibiliza un profundo amor a la Iglesia, que le hace reclamar que sea más comensalidad, mesa servida y abierta, espíritu crítico, que no deje a nadie a la puerta, que iguale a todo el mundo, hombres y mujeres, con los mismos roles, derechos y deberes.

Como siempre, **las páginas de Pepa Torres dejan traslucir una vida sentida y arraigada en el Evangelio y en Jesús, que corre riesgos, que se embarra por el Reino en luchas plurales, que está llena de rostros...**

Y una vez más no puede dejarnos indiferentes a quienes nos acercamos a sus palabras, a sus interpelaciones, desde la humildad del testimonio de una manera comprometida, vecinal, horizontal, de buscar y encontrar a Jesús, de hacer camino con Él.

Si estás dispuesto/a a entrar en una lectura que puede cambiar las perspectivas, conducirte a las periferias, cuestionar las propias instalaciones y ensanchar la mirada, este puede ser un libro para ti. No nos deja indiferentes. Ojalá nos impulse a ir más adentro, más afuera, más hacia los márgenes.

¡Gracias, Pepa!

<https://blog.cristianismeijusticia.net/critique/sobre-teologia-en-las-periferias-el-nuevo-libro-de-pepa-torres>

EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD

Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible

Informe de Oxfam 2021

RESUMEN *

“Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en súper-yates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

La pandemia de COVID-19 será recordada por haberse cobrado más de dos millones de vidas en todo el mundo, y por haber provocado que cientos de millones de personas más se hayan visto sumidas en una situación de pobreza y de falta total de recursos.

Asimismo, es muy probable que la pandemia pase a la historia como la primera vez en que la desigualdad se ha incrementado al mismo tiempo en prácticamente todos los países del mundo.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han manifestado su profunda preocupación porque la pandemia incrementa la desigualdad en todo el mundo, lo cual tendría unos efectos enormemente perniciosos.

“Tendrá un impacto profundo [...] el incremento de la desigualdad generará agitación social y económica, dando lugar a una generación perdida en la década de 2020; las consecuencias de todo ello perdurarán en las décadas siguientes”. Kristalina Gueorgieva, directora general del FMI

El resultado de una encuesta realizada por Oxfam a 295 economistas de 79 países refuerza este punto

de vista. Entre ellos, se encuentran algunos de los y las economistas más destacados a nivel mundial, como Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs y Gabriel Zucman. El 87% prevé que la desigualdad de ingresos aumente o aumente mucho en sus respectivos países como consecuencia de la pandemia. Economistas de 77 de los 79 países encuestados compartían esta opinión. Asimismo, más de la mitad de las y los economistas consultados creen también que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y más de dos tercios de ellos piensan lo mismo respecto a la desigualdad racial. Además, dos tercios de las y los economistas consultados consideran también que sus Gobiernos no han adoptado ningún plan para luchar contra la desigualdad.

Esta desigualdad extrema tiene un coste humano inmenso:

– Las mil mayores fortunas del mundo tan solo han tardado nueve meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del mundo esta recuperación podría prolongarse catorce veces más, a lo largo de más de una década.

– La fortuna acumulada por los 10 milmillonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de toda la población mundial.

* El informe completo puede descargarse en: <https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad>



– A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores económicos más afectados por la pandemia. Si la presencia de hombres y mujeres en dichos sectores fuese totalmente equitativa, 112 millones de mujeres dejarían de tener un riesgo elevado de perder sus ingresos o empleos.

– En Brasil, las personas afrodescendientes tienen un 40% más de probabilidades de morir a causa de la COVID-19 que las personas blancas. Si su tasa de mortalidad hubiese sido la misma que la de las personas brasileñas blancas, se habrían producido 9.200 muertes menos de personas afrodescendientes entre el inicio de la pandemia y junio de 2020. En los Estados Unidos, la población latina y negra tiene más probabilidades de morir por COVID-19 que la población blanca. Si la tasa de mortalidad de estos grupos hubiese sido la misma que la de las personas blancas, aproximadamente 22.000 personas negras y latinas habrían seguido con vida en diciembre de 2020.

– El Banco Mundial ha calculado que, si los países empiezan ya a adoptar medidas para reducir la desigualdad, la pobreza volvería a los niveles previos a la crisis en tan solo tres años, en lugar de tardar más de una década.

Sin embargo, cómo pasará a la historia la respuesta de los Gobiernos ante la pandemia es un capítulo que aún no está escrito. Los Gobiernos de todo el mundo tienen una ventana de oportunidad

cada vez más pequeña para construir una economía inclusiva tras la COVID-19: una economía más justa e inclusiva, que proteja al planeta y acabe con la pobreza.

Para conseguirlo, deben transformar con urgencia el actual sistema económico, que ha explotado y agravado el patriarcado, el supremacismo blanco y los principios neoliberales. Este sistema ha impulsado la desigualdad extrema, la pobreza y la injusticia, y ha creado un mundo que no estaba en absoluto preparado para afrontar esta crisis. Ahora más que nunca, los Gobiernos tienen a su disposición una serie de ideas realistas y sensatas para construir un futuro mejor. Es una oportunidad que no pueden desaprovechar.

El virus ha golpeado un mundo que ya era profundamente desigual

La crisis de la COVID-19 se ha propagado por un mundo que ya era extremadamente desigual. Un mundo en el que una pequeña élite de tan solo 2.000 multimillonarios poseía más riqueza de la que podrían gastar aunque vivieran mil vidas. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día. Un mundo en el que, durante 40 años, el 1% más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial. Un mundo en el que, en el último cuarto de siglo, el 1% más



rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático. Un mundo en el que la creciente brecha entre ricos y pobres tiene su origen, pero también ha agravado, las viejas desigualdades por razones de género y origen racial.

Estas desigualdades son consecuencia de un sistema económico fallido que hunde sus raíces en la economía neoliberal y el secuestro democrático por parte de las élites, y que explota y exagera sistemas profundamente cimentados sobre la desigualdad y la opresión, como el patriarcado y el racismo estructural, impregnados de supremacismo blanco. Estos sistemas se encuentran en el origen de la injusticia y la pobreza; generan enormes beneficios que se acumulan únicamente en manos de la élite patriarcal blanca, a través de la explotación de las personas en situación de pobreza, así como de las mujeres y las comunidades racializadas e históricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo.

La desigualdad implica que haya más personas enfermas, y menos que puedan recibir una educación y llevar una vida feliz y digna. La desigualdad envenena nuestra vida política, alimentando el extremismo y el racismo, socava la lucha para poner fin a la pobreza, y hace que el miedo se imponga a la esperanza para una gran parte de la población.

Esta desigualdad tan extrema se materializa en el hecho de que, incluso antes de la pandemia, miles de millones de personas ya vivían en una situación límite, y carecían de los recursos y el apoyo necesarios para hacer frente a la crisis económica y social generada por la COVID-19. Más de 3.000 millones de personas carecían de acceso a atención médica, tres cuartas partes de los trabajadores y trabajadoras no contaban con mecanismos de protección social como la prestación por desempleo o la licencia por enfermedad, y más de la

mitad se encontraban en situación de "pobreza laboral" en los países de renta baja y renta media-baja.

Desde la irrupción del virus, las personas ricas son más ricas y las pobres más pobres

Durante los primeros meses de la pandemia, el hundimiento de los mercados bursátiles de todo el mundo provocó que los multimillonarios, que son algunos de sus principales accionistas, sufriesen pérdidas considerables. No obstante, este revés fue transitorio. En tan solo nueve meses, las mil personas más ricas del mundo, principalmente hombres multimillonarios blancos, han recuperado toda la riqueza perdida. Los Gobiernos han dado un apoyo sin precedentes a las economías, logrando que las bolsas se disparen y engordando las fortunas de los multimillonarios, a pesar de que la economía real se enfrenta a la peor recesión del siglo. Esto contrasta con la crisis económica de 2008, cuando los multimillonarios necesitaron cinco años para recuperar su nivel de riqueza previo a la crisis. A escala mundial, la fortuna de los multimillonarios aumentó en 3,94 billones de dólares entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Su riqueza conjunta asciende ahora a 11,95 billones de dólares, lo que equivale a la suma que los Gobiernos del G20 han movilizado para responder a la pandemia. Los 10 multimillonarios más ricos del mundo han visto crecer su fortuna en 540.000 millones de dólares durante este período.

Con la prohibición de los vuelos comerciales, la venta de aviones privados se incrementó en todo el mundo. Mientras el Líbano se enfrenta a una implosión económica, los más ricos del país encuentran refugio en *resorts* de montaña. En todos los países, los más ricos se han visto menos afectados por la pandemia, y sus fortunas se recuperan con mayor rapidez. Además, también siguen siendo los que más emisiones de carbono producen y, por lo tanto, los principales impulsores de la crisis climática.

Al mismo tiempo, el mundo se ha visto sacudido por la mayor crisis económica desde la Gran Depresión: cientos de millones de personas han perdido sus empleos, y se enfrentan al hambre y a la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia. Se prevé que esta crisis vaya a revertir los avances realizados en las últimas décadas en términos de reducción de la pobreza a nivel mundial. De hecho, se estima que el número total de personas en situación de pobreza podría haber incrementado entre 200 y 500 millones de personas más en 2020. Así, es posible que el número



de personas en situación de pobreza tarde más de una década en volver a los niveles previos a la crisis.

La pandemia ha puesto de relieve el hecho de que, para la mayor parte de la población mundial, perder tan solo un ingreso supone caer en la miseria. Son personas que sobreviven con tan solo entre 2 y 10 dólares al día, y a menudo viven con sus familias en un par de habitaciones arrendadas en viviendas de barrios marginales. Antes de la crisis actual, todas estas personas se las apañaban para sobrevivir día a día, e incluso empezaban a soñar con un futuro mejor para sus hijos e hijas. Se trata de taxistas, peluqueras y peluqueros, pequeños comerciantes, cocineras y cocineros y personas que trabajan en el sector de la seguridad y la limpieza, en fábricas o en el campo. La crisis del coronavirus nos ha demostrado que la mayor parte de la humanidad nunca está definitivamente a salvo de la pobreza y la inseguridad; en el mejor de los casos, lo único que se ha conseguido es una tregua temporal y profundamente frágil.

Ante semejante sufrimiento, permitir que los multimillonarios se beneficien de esta crisis es simplemente contrario al sentido común, a la ética y a la economía. Por el contrario, el incremento de la riqueza debería utilizarse para hacer frente a la crisis, salvar millones de vidas y proteger miles de millones de medios de vida.

La pandemia puede generar un aumento sin precedentes de la desigualdad

Si bien es demasiado pronto para tener una visión completa, la mayoría de los estudios preliminares apunta a que la desigualdad se incrementará considerablemente. El virus ha tenido impactos económicos graves en todos los países del mundo al mismo tiempo, lo cual significa que, por primera vez desde que hay registros, la desigualdad se incrementará en prácticamente todos los países del mundo.

El resultado de una encuesta realizada por Oxfam a 295 economistas de 79 países refuerza este punto de vista. Entre ellos, se encuentran algunos de los y las economistas más destacados a nivel mundial, como Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs y Gabriel Zucman.

El 87% de las y los economistas encuestados prevé que la desigualdad de ingresos aumente o aumente mucho en sus respectivos países como consecuencia de la pandemia. Economistas de 77 de los 79 países encuestados compartían esta opinión. Asimismo, más de la mitad de las y los economistas consultados creen también que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y más de dos tercios de ellos piensan lo mismo respecto a la desigualdad racial. Además, dos tercios de las y los economistas consultados consideran también que sus Gobiernos

no han adoptado ningún plan para luchar contra la desigualdad.

Los Gobiernos tienen elección: la desigualdad no es inevitable

El incremento de la desigualdad es prácticamente una certeza. Sin embargo, la magnitud de este incremento y la velocidad a la que puede reducirse, para así alcanzar una mayor equidad, es una elección de los Gobiernos. Según el Banco Mundial, si los Gobiernos permiten que se produzca un incremento de la desigualdad de dos puntos porcentuales al año, en 2030 habrá 501 millones de personas más que vivan con menos de 5,50 dólares al día, y el número total de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza será mayor que antes de la crisis. Por el contrario, si los Gobiernos empiezan desde ahora a adoptar medidas para reducir la desigualdad en dos puntos porcentuales cada año, la pobreza podría volver al nivel previo a la crisis en tres años, y en 2030 habría 860 millones de personas menos en situación de pobreza comparado a un escenario en el que la desigualdad haya seguido creciendo.

El virus exagera las desigualdades existentes y se alimenta de ellas

La pandemia ha afectado en mucha mayor medida a las personas en situación de pobreza que a los ricos, y ha tenido consecuencias especialmente graves para las mujeres, las personas negras y afrodescendientes, los Pueblos Indígenas, y las comunidades históricamente excluidas y oprimidas en todo el mundo. Las mujeres y, en mayor medida, las mujeres racializadas, tienen un mayor riesgo que los hombres de perder su empleo a causa del coronavirus. En América Latina, la población afrodescendiente y los Pueblos Indígenas, que ya experimentaban una situación de exclusión, se han visto más afectados que el resto de la sociedad: tienen más probabilidades de morir a causa del virus, y también de verse carentes de todo recurso para salir adelante.

Salud

El coronavirus ha destapado las peores consecuencias de la deficiente dotación y financiación de los sistemas de salud públicos, así como la ineficacia de los sistemas privados, basados en la riqueza de las personas, a la hora de hacer frente a una crisis como esta.

La probabilidad de morir por COVID-19 es considerablemente mayor para las personas que viven en situación de pobreza. Y para las personas negras o indígenas, es aún mayor. En Brasil, por

ejemplo, la probabilidad de morir por COVID-19 era mucho mayor entre la población afrodescendiente que entre la población brasileña blanca. Si la tasa de mortalidad hubiese sido la misma que la de las personas blancas, se habrían producido 9.200 muertes menos de personas afrodescendientes entre el inicio de la pandemia y junio de 2020.

Educación

En 2020, más de 180 países cerraron temporalmente sus centros educativos y, en el peor momento, 1.700 millones de estudiantes dejaron de poder ir a la escuela. La pandemia privó a los niños y niñas de los países más pobres de casi cuatro meses de escolarización, frente a las seis semanas en el caso de los niños y niñas de los países de renta alta.

Según las estimaciones, la pandemia revertirá los avances realizados durante los últimos veinte años en relación a la educación de las niñas, lo cual se traducirá en un incremento de la pobreza y la desigualdad.

Empleo y medios de vida

La pandemia ha provocado la pérdida de cientos de millones de empleos. El índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (CRI) elaborado por Oxfam y Development Finance International muestra que, cuando irrumpió la pandemia, en 103 países al menos un tercio de su población activa carecía de derechos laborales, así como de mecanismos de protección social como la licencia por enfermedad.

La pandemia ha dejado al descubierto, de forma brutal, las desigualdades del sistema laboral. Por ejemplo, mientras que el 90% de las trabajadoras y trabajadores estadounidenses que se encuentran en el cuartil con más ingresos tiene derecho a licencia remunerada por enfermedad, tan solo el 47% de quienes se encuentran en el cuartil con menores ingresos disfrutaban de ese derecho. En los países de renta baja, el 92% de las mujeres trabaja en el sector informal o tiene empleos peligrosos o inseguros. El coronavirus también ha generado un enorme incremento del volumen de trabajo de cuidados mal remunerado o no remunerado, que recae principalmente sobre las mujeres, y especialmente sobre las mujeres pertenecientes a grupos excluidos por razones de origen racial o étnico.

La catastrófica pérdida de ingresos, sumada a la ausencia de mecanismos de protección social, se ha traducido en un brutal incremento del hambre. Según estimaciones iniciales, al menos 6.000 personas habrían podido morir de hambre cada día

a finales de 2020 a causa de los impactos de la pandemia.

Pero el virus también nos ha enseñado lo verdaderamente importante y lo que somos capaces de lograr

El virus nos ha hecho reflexionar sobre lo que de verdad importa, y sobre qué deberíamos valorar más como sociedad. Nos ha enseñado que los trabajadores y trabajadoras esenciales son las enfermeras y enfermeros, las conductoras y conductores de autobús y las personas que trabajan en los supermercados, y no los directivos de los fondos de cobertura o los abogados de las grandes empresas.

De repente, las políticas de carácter transformador que eran impensables antes de la crisis se han convertido en una opción posible. No podemos volver a la sociedad desigual que existía antes de la crisis. Al contrario, los Gobiernos deben priorizar la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible, y una economía más humana.

“A lo largo de la historia, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado.

Esta no es diferente. Es un portal, una puerta entre el mundo de hoy y el siguiente. Podemos optar por atravesar esa puerta arrastrando los cadáveres de nuestros prejuicios y nuestro odio, nuestra avaricia, nuestras bases de datos y nuestras ideas muertas, dejando atrás ríos muertos y cielos cubiertos de humo. O bien podemos cruzarla con paso ligero, con poco equipaje, preparadas para imaginar otro mundo, y para luchar por él.” Arundhati Roy

Las personas anhelan un mundo muy distinto

Las personas exigen un mundo mejor; ya era evidente antes de la crisis, y lo es aún más ahora. En 2019, antes de la pandemia, las protestas contra la desigualdad se habían extendido por todo el mundo. En 2020, las manifestaciones del movimiento *Black Lives Matter* han puesto de manifiesto el profundo rechazo hacia la desigualdad racial. Encuestas de opinión en todo el mundo revelan un apoyo mayoritario a la adopción de medidas que permitan construir un mundo más justo y sostenible en respuesta a la pandemia.

Tras la crisis económica de 2008, los Gobiernos tomaron decisiones políticas claras: reducir los impuestos a las personas y empresas más ricas;



permitir que las empresas priorizaran el pago de dividendos aún mayores a sus ya ricos accionistas, en detrimento de las trabajadoras y trabajadores; aplicar brutales medidas de austeridad, con recortes a servicios públicos como los sistemas de salud; y seguir subvencionando los combustibles fósiles y la destrucción del clima. Estas decisiones han incrementado la desigualdad, y han provocado un enorme sufrimiento. Esta vez la historia no puede volver a repetirse.

Esta idea cada vez tiene más aceptación entre las personas y organizaciones más influyentes del mundo, incluyendo aquellas que representan al *statu quo*. Recientemente, Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, organismo responsable del foro de Davos, ha cuestionado la "ideología neoliberal", afirmando que "debemos superar el neoliberalismo en la era post-COVID". El FMI ha afirmado que no deberíamos volver a la austeridad, y se ha manifestado en favor un sistema tributario progresivo. El *Financial Times* ha instado a poner en marcha "reformas radicales" que permitan revertir "las políticas imperantes en las últimas cuatro décadas", defendiendo con argumentos la necesidad de redistribuir la riqueza, así como de garantizar rentas básicas y establecer impuestos a la riqueza. Sin la pandemia, este tipo de argumentos hubieran sido impensables en los últimos años.

Oxfam ha identificado cinco pasos para conseguir un mundo mejor.

1. Un mundo mucho más igualitario en el que valdremos lo verdaderamente importante

La construcción de nuestro nuevo mundo debe basarse, en primer lugar, en una reducción radical y sostenida de la desigualdad. Los Gobiernos deben establecer metas concretas de reducción de la desigualdad, y sujetas a plazos precisos. El objetivo de los Gobiernos no debe limitarse a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis, sino que deben ir más allá para construir, con carácter de urgencia, un mundo más justo. Asimismo, los Gobiernos tienen que dejar de anteponer el producto interior bruto (PIB) a todo lo demás y empezar a valorar lo que realmente importa. La lucha contra la desigualdad, incluyendo la desigualdad racial y de género, debe ser un elemento central del rescate económico y de las iniciativas de recuperación. Corea del Sur, Sierra Leona y Nueva Zelanda ya se han comprometido con la reducción de la desigualdad como prioridad nacional, demostrando que es un camino posible.

El Banco Mundial ha calculado que, si los países adoptan medidas urgentes para reducir la desigualdad, la pobreza volvería a los niveles previos a la crisis de coronavirus en tres años, en lugar de dentro de más de una década.

2. Un mundo con economías más humanas que cuiden de las personas

Los Gobiernos deben rechazar la desfasada fórmula de la austeridad brutal e insostenible, así como garantizar la prosperidad de todas las personas, y asegurar que su salud y su educación no dependan de su género o de su origen racial. En lugar de eso, tienen que invertir en atención médica gratuita y universal, educación, cuidados y otros servicios públicos. Los servicios públicos universales constituyen los cimientos de unas sociedades libres y justas, y tienen un poder incomparable para reducir la desigualdad. No solo permiten eliminar la brecha entre ricos y pobres, sino que también contribuyen a reducir las disparidades entre hombres y mujeres, especialmente en lo que respecta a la redistribución de las responsabilidades del trabajo de cuidados no remunerado. Asimismo, estos servicios contribuyen a equilibrar las oportunidades para los grupos racializados y demás comunidades históricamente excluidas y oprimidas. Países como Costa Rica y Tailandia han alcanzado la cobertura sanitaria universal en tan solo una década. Otros países también pueden hacerlo.

Los Gobiernos deben suministrar con urgencia una vacuna universal contra la COVID-19 a fin de hacer frente a la pandemia. Para lograrlo, deben enfrentarse a los intereses de las empresas farmacéuticas e insistir en la necesidad de garantizar un acceso libre a todas las patentes y tecnologías pertinentes, de modo que todas las personas puedan tener acceso a vacunas y tratamientos eficaces de forma segura.

La cancelación de los pagos de deuda permitiría a los países pobres movilizar 3.000 millones de dólares al mes, que podrían invertir en garantizar atención médica gratuita para todas las personas.

3. Un mundo libre de toda explotación y en el que haya seguridad de ingresos

Las desigualdades deben abordarse de raíz para que no se sigan produciendo. Para ello, las empresas tendrían que reestructurarse, de tal manera que su prioridad sea el conjunto de la sociedad, y no repartir dividendos cada vez más cuantiosos entre sus ya de por sí ricos accionistas. Los ingresos deberían estar garantizados, y los salarios tener un techo máximo. La existencia de millonarios es un

síntoma de fracaso económico, y la riqueza extrema debería desaparecer.

El virus ha demostrado que es imprescindible que los ingresos estén garantizados, y también que es posible encontrar una salida permanente a la pobreza. Para lograrlo, no solo necesitamos salarios dignos, sino una seguridad laboral mucho más sólida, lo cual incluye garantizar los derechos laborales, las licencias por enfermedad y maternidad y paternidad remuneradas, y las prestaciones por desempleo para aquellas personas que pierdan su trabajo.

Asimismo, los Gobiernos deben reconocer, reducir y redistribuir el volumen de trabajo de cuidados mal remunerado o no remunerado, que recae principalmente sobre las mujeres, y especialmente las mujeres racializadas.

Un estudio del High Pay Centre en el Reino Unido ha revelado que establecer un salario máximo de 100.000 libras (aproximadamente 133.500 dólares) permitiría redistribuir un volumen de efectivo equivalente al de un millón de empleos. Esto demuestra que, si los muy ricos ganasen un poco menos, sería posible evitar despidos masivos.

4. Un mundo donde los más ricos paguen los impuestos que les corresponden de manera justa

La crisis del coronavirus debe suponer un punto de inflexión en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Cuando miremos atrás, debemos ver esta crisis como el punto de inflexión a partir del que volvimos a gravar la riqueza de forma justa y revertimos la carrera a la baja en la tributación. Algunas de las medidas propuestas para lograrlo son el incremento de los tipos de los impuestos a la riqueza, así como el establecimiento de impuestos a las transacciones financieras, y acabar con la evasión y la elusión fiscal. Un sistema tributario progresivo que grave de manera justa a los más ricos de la sociedad debe ser la piedra angular de una recuperación justa de la crisis, ya que permitirá invertir en un futuro justo y verde. Argentina ha abierto el camino, con la adopción de un impuesto solidario a la riqueza, de carácter temporal, que grava la riqueza extrema; este impuesto podría recaudar más de 3.000 millones de dólares que permitirían financiar las medidas para luchar contra el coronavirus, por

ejemplo invirtiéndolo en suministros médicos y ayudas para las personas en situación de pobreza y las pequeñas empresas.

Un impuesto sobre los beneficios excesivos obtenidos por las grandes empresas durante la pandemia de coronavirus podría generar 104.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para financiar prestaciones por desempleo para todos los trabajadores y trabajadoras, así como para proporcionar apoyo económico a todos los niños, niñas y personas mayores de los países más pobres.

5. Un mundo con seguridad climática

La crisis climática es la mayor amenaza existencial a la que el ser humano se haya enfrentado jamás. Ya está destruyendo medios de vida y arrebatando vidas en las comunidades en mayor situación de pobreza e históricamente oprimidas. Las mujeres de estas comunidades son las principales afectadas.

Para evitarlo, debemos construir una economía verde que evite una mayor degradación del planeta y lo preserve para las futuras generaciones. Es imprescindible acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles, y dejar de permitir que las empresas de combustibles fósiles y sus ricos accionistas se beneficien de los rescates de los Gobiernos. La lucha contra la desigualdad y la lucha por la justicia climática son, en realidad, la misma lucha. La pandemia nos ha demostrado que los Gobiernos pueden actuar a gran escala para hacer frente a las crisis. Por lo tanto, debemos exigir la misma intensidad en la lucha para evitar la crisis climática.

El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora

Estamos en un momento crucial para la humanidad que pasará a los anales de la historia. No podemos volver al mundo brutal, injusto e insostenible en el que vivíamos antes de la irrupción del virus. La humanidad dispone de un talento increíble, una enorme riqueza y una imaginación infinita. Debemos sacar partido a estos recursos para construir una economía más humana y justa al servicio de todas las personas.

Consecuencias de que el agua cotice en el mercado de futuros

Yago Álvarez Barba

El Salto. 10/12/2020

El uso del agua en California ha pasado a cotizar desde el lunes en el mercado de futuros. Una vuelta de tuerca más en la financiarización y privatización del agua.

Se rumoreaba desde hace un par de meses y, esta semana, el momento llegó. Desde el lunes, el agua ya es un producto que cotiza y se comercia en los mercados de futuros. Los incendios desatados en California, uno de los estados norteamericanos con una mayor industria agrícola, y la escasez de agua que están provocando han servido de excusa perfecta para llevar este bien tan básico al mercado de futuros de materias primas y convertirlo en un producto especulativo.

Su valor, que en California se ha duplicado en el último año, se marcará en el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se basa en el precio de los derechos del agua en el mercado de futuros de varias zonas de California y que funciona desde 2018. La cotización actual del bien es de 486 dólares por acre pie, lo que equivale a unos 1,4 millones de litros. El mercado de futuros consiste en poder

negociar el valor de un bien en una fecha futura, lo que, según los defensores de este tipo de mercados, ayuda a asegurar precios futuros, hacer más eficiente el mercado del agua y a que los agricultores o municipios no tengan problemas en el futuro para abastecerse de agua, protegiéndose así de los vaivenes de los mercados.

Pero esa defensa del mercado de futuros hace aguas por todas partes si vemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con los productos básicos que se han postrado a los pies de los especuladores. Uno de los ejemplos más recientes y devastadores fue el incremento de los precios de alimentos básicos durante la crisis financiera de 2008. Cuando las bolsas se hundieron en los años posteriores a la caída de Lehman Brothers, los inversores que huían de los circuitos financieros e inmobiliarios buscaron productos seguros donde invertir sus



capitales. El mercado de futuros de alimentos básicos, como el trigo o el maíz, atrajo enormes cantidades de dinero que compraban estos productos básicos en forma de futuros, lo que provocó que los precios pactados fueran cada vez más altos debida a la enorme demanda, lo cual a su vez provocó una subida generalizada de los precios de los alimentos en todo el planeta, causando hambrunas y millones de muertes en los países del sur global.

Uno de los ejemplos más claros es el del aceite de palma, según explica la periodista e investigadora Laura Villadiego, del proyecto Carro de Combate. "Se calcula que en la Bolsa de Malasia se intercambia cada tonelada de aceite de palma producida unas cinco veces antes de llegar a su comprador final y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 98% de los contratos de futuros nunca llegan a materializarse, son puras herramientas de especulación", lamenta Villadiego. Esos movimientos puramente especulativos tienen un impacto sobre los precios, "que se traslada después a los agricultores que producen aceite de palma". Cuando los precios suben, explica, "se abren más plantaciones, unas veces a costa de bosque primario y, otras veces, a costa de otras materias primas, muchas veces cultivos para la alimentación básica de la población", y cuando los precios caen, "todos arruinados".

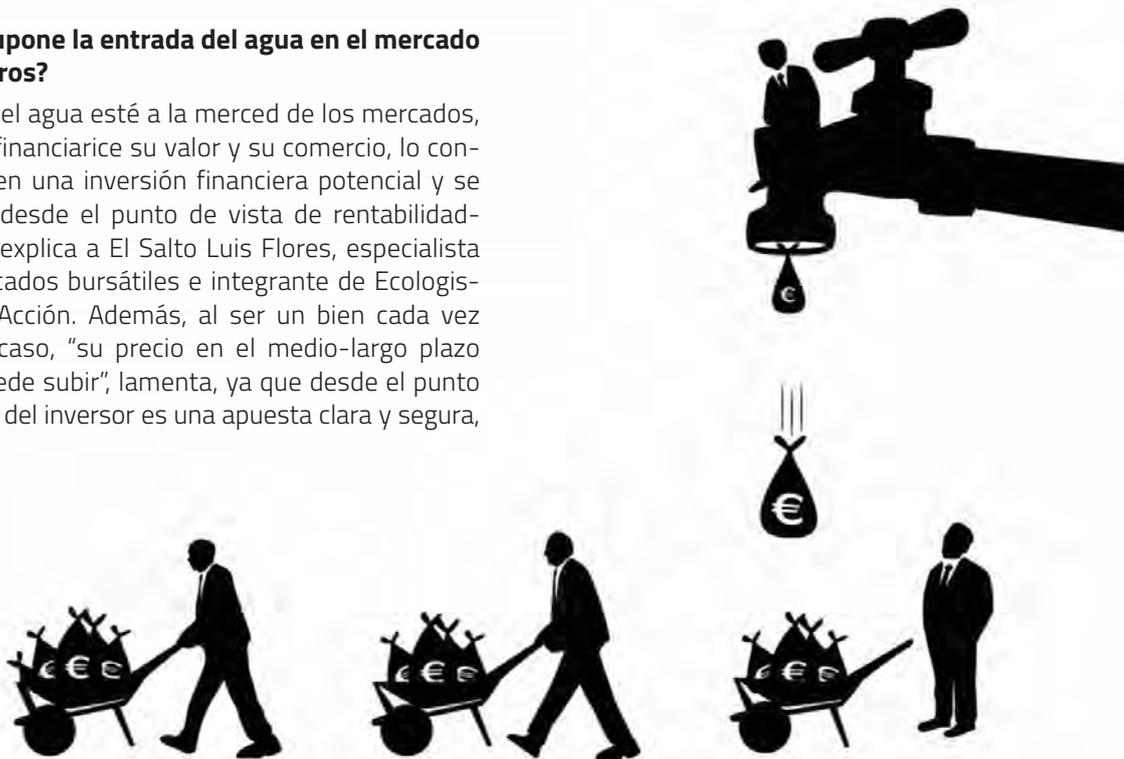
¿Qué supone la entrada del agua en el mercado de futuros?

Que el agua esté a la merced de los mercados, que se financiarice su valor y su comercio, lo convierte "en una inversión financiera potencial y se analice desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo", explica a El Salto Luis Flores, especialista en mercados bursátiles e integrante de Ecologistas en Acción. Además, al ser un bien cada vez más escaso, "su precio en el medio-largo plazo solo puede subir", lamenta, ya que desde el punto de vista del inversor es una apuesta clara y segura,

como ya ocurrió con las tierras cultivables y otros alimentos básicos anteriormente. El impacto de que coticen ahora solo afectará a las zonas de California y a los derechos de aprovechamiento del agua a los que se refieren estos nuevos futuros pero, alerta Flores, "se marca una tendencia muy preocupante".

La especulación sobre el agua no en nueva esta semana, "solo hay que ver las fluctuaciones del precio del índice sobre el que se lanzan ahora estos futuros", argumenta Flores. El NQH2O subió un 227% durante el primer semestre del año y cayó un 31% en lo que llevamos del segundo semestre. "Probablemente, los futuros contribuyan a incrementar esa volatilidad".

Coincidiendo con Villadiego, Flores defiende que la teoría de que los futuros pueden servir para mitigar los riesgos de los productos a los que están vinculados es muy distinta de lo que acaba ocurriendo en la mayoría de los casos. "La realidad demuestra exactamente todo lo contrario, los futuros se convierten en una herramienta especulativa donde el 'músculo' para hacer la apuesta más grande es capaz de mover el precio de los futuros en un sentido u otro. Y los futuros son precisamente los esteroides para ese músculo, ya que permiten hacer apuestas disponiendo de solo un porcentaje mínimo de los fondos que se quieren apostar".





Mercados en busca de inversiones seguras

Al igual que ocurrió tras 2008 con los mercados ávidos de encontrar inversiones seguras, en esta nueva crisis los bancos centrales han inundado de dinero a los mercados con la intención de mantener y reflotar la economía ante la crisis del covid-19. Este exceso de capital y unos mercados bursátiles han llevado a los "valores refugio", como el caso del oro, a máximos históricos. Los inversores desconfían de las bolsas pero tienen mucho capital que han conseguido a un interés muy bajo por parte de esos bancos centrales y necesitan encontrar un lugar seguro y que reporte beneficios.

En ese contexto, la tendencia que marca la noticia sobre el derecho del agua en California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir esos capitales, que deberían servir para reconstruir la economía y salir de la crisis, a la especulación con el bien básico. "A partir de ahora, los futuros sobre agua son para estos grandes inversores una alternativa más en la que invertir y solo por ello, el precio de los futuros, del índice al que se ligan y por tanto del agua, debería subir", argumenta Flores.

Un paso más para privatizar el agua

El caso California no arranca esta semana. La sequía que sufrió el estado entre 2012 y 2016 fue acompañada de cambios legislativos para privatizar el uso del agua. "Esto es solo una nueva vuelta de tuerca a ese proceso", dice Liliana Pineda, miembro de Attac y la Plataforma Contra la Privatización del Agua. "Cuando se habla de derechos

del agua, se habla de derechos privados, ya que el agua pública no es un bien titularizable", argumenta Pineda, "y no debería serlo", matiza. Según ella, lo que se intenta es que los municipios intercambien concesiones sobre agua por dinero en lo que tacha de un "chantaje a los ayuntamientos que necesitan ese dinero para meterlo en ladrillo o pagar deudas a que titularicen, y por lo tanto privaticen, el uso del agua".

Esa nueva vuelta de tuerca a la que se refiere Pineda es la privatización de bienes y servicios públicos básicos que llevamos sufriendo las últimas décadas. "Es una vuelta de tuerca al proceso de financiarización de todo lo común", dice la activista, "una tendencia a la privatización que, en caso de avanzar y extenderse a otros países, podría hacer el agua más susceptible de ser privatizada por parte de las administraciones públicas". Además, estos procesos de titularización y comercialización "afianzan los modelos de gestión privada y son un espaldarazo a dicha gestión".

"La ONU considera el agua un derecho humano, España todavía no ha traspuesto ese mandato", lamenta Pineda, por lo que se debería paralizar todo proceso de convertirlo en un bien bursátil especulativo. Desde la Red de Agua Pública o la Plataforma contra la Privatización del Agua piden exactamente lo contrario a lo que ha sucedido esta semana en California: "Tiene que haber una mayor inversión pública y no por los cauces bursátiles". "Cuando entra en el mercado de futuros no sabemos en manos de quién está el agua, puede estar en manos de un fondo buitre en un paraíso fiscal que no tiene ningún interés más que ganar dinero", lamenta Pineda.

JURISPRUDENCIA PARA PROTEGER EL DERECHO HUMANO AL AGUA

María Luisa Ramos Urzagaste

Rebelión. 14/01/2021

El agua es un elemento que no tiene sustitutos y después del aire, la vida sin ella es imposible. La muerte es inminente si es que nos falta más de cinco días consecutivos, y el cuerpo humano no tiene la capacidad de almacenarla. Los especuladores lo saben, por eso han iniciado su acaparamiento.

El 7 de diciembre de 2020, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo, que se comercializa ahora bajo el nombre de índice *Nasdaq Veles California Water Index*. Actualmente, no hay normativa que los detenga, ni a nivel internacional, menos en EEUU, que es el sitio donde se ha iniciado ese proceso especulativo.

CME Group ya lo había enunciado en septiembre pasado: a partir de 2025 dos tercios de la población mundial sufrirá de escasez de agua. En opinión de dicho grupo empresarial, el lanzamiento del recurso al mercado, permitirá, "una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados", por ahora localizado en California.

Este acto especulativo hace prever que la competencia por el agua destinada al consumo humano competirá con la demanda de agua para riego y otras actividades comerciales de gran escala.

Para quienes les tiene sin cuidado o pasan por alto de que se trata de un elemento vital para la vida, este es el momento para asegurarse su disponibilidad a futuro, y así poner a buen recaudo sus futuras ganancias. El momento COVID-19 es perfecto para esas iniciativas privadas, pues todos estamos ahora distraídos con la pandemia y sus consecuencias.

CME Group lo ha expuesto de manera clara: "Este nuevo e innovador contrato de agua se basa en nuestra sólida asociación con Nasdaq, así como

en nuestro historial comprobado de 175 años de ayudar a los usuarios finales y otros participantes del mercado a gestionar el riesgo en los mercados de productos básicos esenciales, incluidos la agricultura, la energía y los metales".

Aquí vale la pena subrayar que cuando se habla conceptos tales como: mercados, oferta y demanda, se refiere estrictamente a mercancías, donde no tiene cabida la noción de derecho humano. En los mercados de productos solo participan quienes tienen capacidad de pago, los demás están fuera, no existen. Esa es la visión economicista y neoliberal que promueve el mercado como mecanismo "regulador".

Este hecho sin precedentes, no solo debe ser una alerta, también debe conducir a los gobiernos nacionales, regionales, locales y distintas instituciones y organizaciones a tomar medidas serias y concretas para impedir que el acceso al líquido vital para la vida sea tratado como una mercancía.

El hecho es que hemos ingresado ya a una nueva etapa de la lucha por el derecho humano al agua. ¿o es que acaso queda alguna duda que ese mecanismo especulativo se limitará a California? Tampoco faltarán los organismos internacionales y ONGs que quieran poner paños fríos a esta preocupación, en defensa de intereses transnacionales.

La tarea actual de los Estados (como ente regulador de las relaciones al interior de sus países) y para quienes se consideran defensores de los derechos humanos, es evitar que el economicismo cunda las áreas donde debe prevalecer la defensa del derecho a la vida.

Son los gobiernos e instituciones que defienden al ciudadano los llamados a garantizar el derecho humano. Porque debe quedarnos absolutamente claro que, allí donde el mercado ve clientes, no

caben ciudadanos sin dinero, aunque eso implique perder la vida. El mercado por su propia naturaleza no es un mecanismo redistributivo, equitativo, menos de justicia.

La disputa: agua para beber y vivir o para regar

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa. El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para las personas.

Es fácil prever que la creación y lanzamiento del Nasdaq Veles California Water Index conllevará tarde o temprano un incremento del precio del agua porque ya se ha hecho evidente la puja entre agua para riego y agua para consumo humano, lo que provocará además un incremento de los precios de los alimentos.

El primer paso ya está dado, el mundo se ha sorprendido, es cierto, pero ellos, los especuladores no pararán, y es muy previsible un efecto contagio en todo el mundo, tal vez en algunos sitios más rápido que en otros, siempre y cuando no salgamos rápido del asombro.

Ya lo advirtió Elsa Bruzzone, analista de recursos naturales y autora del libro "Las guerras del agua", cuando dijo a Sputnik que "En la década de 1990 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, agencias gubernamentales de los países más ricos y corporaciones transnacionales –muchas de ellas dedicadas al comercio del agua– instalaron la idea que [el agua] puede ser una mercancía sujeta a las leyes de oferta y demanda del mercado".

Esto muestra que urge tomar conciencia de cuáles son las instituciones internacionales que promueven su privatización o evaden la discusión.

Si es que no se toman medidas para garantizar el derecho al agua para consumo humano, pronto se verán buques transportadores de agua tal como sucede con el petróleo y gas, llevando el líquido elemento al mejor postor.

Y no basta con hacer declaraciones generales, crear lindos estribillos o protestar. Se hace necesario y urgente declarar una política que dé prioridad al agua para consumo humano, frente a otras actividades, como el riego o la producción industrial.

Para muestra un botón: México

Un estudio publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) titulado *Los millonarios del Agua* encontró que, hasta enero de 2020, apenas 1,1% de los usuarios del agua en México es responsable de explotar 22,3% de los recursos hídricos de México. Entre este grupo se encuentran empresas como Kimberly Clark y Banco Azteca, ligadas a Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego. Del mismo modo, destacan FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp y Buenavista, ambas de Grupo México, entre otros.

Los investigadores de la UNAM alertan sobre el hecho de que algunos bancos, como Banco Azteca y BBVA, han aumentado su participación en grandes concesiones de agua.

Por otro lado, hay constituciones como la actual de Chile que permite la privatización del agua, que antepone el derecho de las empresas y transnacionales en detrimento de un derecho elemental de los ciudadanos.

Queda claro que mientras haya gobiernos nacionales, regionales o municipales, así como parlamentos que otorguen concesiones sin límites a las corporaciones transnacionales, ellas harán lo que mejor les convenga a sus intereses.

No tiene sustituto

El agua, en términos económicos tiene una "demanda inelástica" porque no tiene sustitutos. Al ser vital para la vida, incluso si el precio varía sustancialmente, la demanda no variará, no se reducirá la tasa de consumo, porque la gente la necesita para vivir.

Una persona podría reducir la cantidad de agua que utiliza para bañarse, lavar los utensilios, etc., pero jamás dejaría de beber agua pues eso le significaría la muerte.

Esta característica hace que sea la mercancía perfecta para especular, si es que se le deja al libre acceso y manipulación de los especuladores o del mercado.

La ONU debe hacer más

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó una Observación General sobre el derecho al agua y estableció que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". El problema es que muchos enunciados como éste, es que no son legalmente vinculantes.

Asimismo, la Resolución 64/292 de la Asamblea de la ONU en 2010 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Pero esa resolución no basta para frenar la actual arremetida especulativa.

Los gobiernos y la sociedad civil deben hacer esfuerzos para que la próxima Conferencia del Agua de la ONU planificada para el 22, 23 y 24 de marzo de 2023 en Nueva York, y su antesala preparatoria a celebrarse en 2021, no se diluya en estribillos, ni sean cooptadas por las transnacionales, sino que generen mecanismos viables y concretos de defensa de este derecho humano.

Pero no se debe esperar a que la ONU resuelva el problema en una próxima conferencia.

Ahora apremia que los distintos niveles de gobernabilidad: a nivel nacional, regional, local, municipal, pasando por los comités de agua, allí donde existan, inicien la discusión, elaboración y aprobación de iniciativas legislativas para proteger el líquido elemento de la especulación y la privatización.

Generar jurisprudencia

La tarea urgente no sólo implica resistir la privatización y especulación mediante la apropiación privada del recurso, sino que se debería crear jurisprudencia, mediante normas, decretos leyes, reglamentos que tejan una red jurídica, que a futuro

sirva como sustento para frenar la especulación y su trato como mercancía.

Otra importante actividad es que, en el marco de la Organización mundial del Comercio, OMC, los gobiernos deberían buscar de manera explícita que se reconozca que el agua no es una mercancía, incluyendo las fuentes y el servicio de transporte y abastecimiento.

Los países deberían realizar un relevamiento de datos del líquido elemento, para conocer su disponibilidad, localización, problemáticas internas, así como los recursos compartidos en frontera con países limítrofes.

También apremia que los gobiernos definan la relación de agua para consumo humano directo, frente a otras actividades como la agricultura u otras industrias altamente demandantes, tomando en cuenta la proyección de crecimiento poblacional, para evitar que a futuro esas demandas colisionen y la disputa se resuelva mediante mecanismos economicistas.

Aún estamos a tiempo, el desafío requiere de creatividad, pero ante todo de compromiso con lo más preciado que tenemos, la vida. Se trata de ser solidarios con nuestra generación y con las futuras generaciones, porque un mundo más justo es posible, solo depende de nosotros.

Fuente:

[https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012221093915917-jurisprudencia-para-proteger-el-derecho-humano-al-agua-/](https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012221093915917-jurisprudencia-para-proteger-el-derecho-humano-al-agua/)

¿Queremos vacunas rápido?

Suspendamos los derechos de propiedad intelectual

*Achal Prabhala, Arjun Jayadev, Dean Baker **

SinPermiso

12/12/2020

Como dicen algunos informes, este es el principio del fin. Tres vacunas para el coronavirus han dado resultados excelentes, y se espera que vengan más.

Pero este no es el principio del fin; solo es el principio de una espera infinita: no hay suficientes vacunas para todos los países ricos, no digamos ya para los pobres.

Por esto tiene poco sentido que los EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea, entre otros, bloqueen una propuesta en la Organización Mundial del Comercio que les permitiría a ellos, y al resto del mundo, obtener más de las vacunas y tratamientos que todos necesitamos.

La propuesta, sacada adelante por la India y Sudáfrica en octubre, pide a la OMC que exima a los países miembros de aplicar algunas patentes, secretos industriales o monopolios farmacéuticos amparados por el acuerdo de la organización en materia de propiedad intelectual, el conocido como TRIPS.

Cita las "circunstancias excepcionales" creadas por la pandemia y sostiene que las protecciones de la propiedad intelectual "obstaculizan o podrían obstaculizar el suministro oportuno de productos médicos asequibles"; la exención permitiría a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio modificar sus leyes para que las empresas de esos países pudieran producir versiones genéricas de cualquier vacuna contra el coronavirus y tratamientos con COVID-19.

A la idea se han opuesto desde el inicio los EE.UU., la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Japón, Canadá, Australia y Brasil. Se opusieron de nuevo en otra reunión en noviembre, y de nuevo la semana pasada. Según nuestro recuento, casi 100 países están a favor de la propuesta, y sin embargo, como casi todas las decisiones de la OMC se toman por consenso, un pequeño número

de países puede frustrar la voluntad de la mayoría, incluso de una supermayoría. (La organización tiene 164 miembros.)

El representante comercial de los Estados Unidos ha dicho que la protección de los derechos de propiedad intelectual y, por lo demás, "la facilitación de incentivos para la innovación y la competencia" era la mejor manera de asegurar la "entrega rápida" de cualquier vacuna y tratamiento. La Unión Europea ha sostenido que "no había indicios de que cuestiones concernientes a los derechos de propiedad intelectual hayan constituido un verdadero obstáculo en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con el COVID-19". La misión británica ante la Organización Mundial de la Salud está de acuerdo, caracterizando la propuesta de exención como "una medida extrema para abordar un problema no probado".

De hecho, la novedosa tecnología que constituye el núcleo de la vacuna Moderna, por ejemplo, fue desarrollada en parte por los Institutos Nacionales de Salud con fondos federales de los Estados Unidos. Moderna recibió entonces un total de unos 2.500 millones de dólares de los contribuyentes para el apoyo a la investigación y como reserva de vacunas; según la propia empresa, la contribución de 1.000 millones de dólares que recibió para la investigación cubrió el 100 por ciento de esos costos.

Moderna se ha comprometido a no reclamar sus "patentes relacionadas con COVID-19 contra

* **Arjun Jayadev** es profesor de economía en la Universidad Azim Premji, en Bangalore, y economista superior del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico.

Achal Prabhala es el coordinador del proyecto AccessIBSA, que hace campaña por el acceso a los medicamentos, y un miembro de la Fundación Shuttleworth, en Bangalore.

Dean Baker es economista senior en el Centro de Investigación de Economía y Política en Washington, D.C.

aquellos que fabrican vacunas destinadas a combatir la pandemia". Pero como ha señalado Médicos Sin Fronteras, esa oferta es menos generosa de lo que parece, ya que otros tipos de propiedad intelectual, como los conocimientos técnicos o los secretos comerciales, suelen ser necesarios para desarrollar y producir vacunas.

Pfizer, por su parte, recibió una subvención de 455 millones de dólares del gobierno alemán para desarrollar su vacuna, y luego, según nuestro recuento, casi 6.000 millones de dólares en compromisos de compra de los Estados Unidos y la Unión Europea.

AstraZeneca se benefició de cierta financiación pública mientras desarrollaba su vacuna, y recibió un total de más de 2.000 millones de dólares de los Estados Unidos y de la Unión Europea tanto para investigación como para compromisos de compra. También firmó un acuerdo por valor de 750 millones de dólares para suministrar un total de 300 millones de dosis a la Coalición de Innovaciones para la Preparación ante Epidemias y a GAVI, la Alianza para la Vacunación.

En otras palabras, las vacunas desarrolladas por estas empresas se desarrollaron gracias al dinero de los contribuyentes, en su totalidad o en parte. Esas vacunas pertenecen esencialmente al pueblo, y sin embargo el pueblo está a punto de pagarlas de nuevo, y con pocas perspectivas de conseguir todas las que necesita con la suficiente rapidez.

Calculamos, basándonos en la capacidad de producción de vacunas declarada por Pfizer y Moderna y sus acuerdos de suministro con los Estados Unidos y la Unión Europea, así como con Japón y Canadá, que estos países pueden esperar, en el mejor de los casos, tener alrededor del 50% de sus poblaciones cubiertas para finales de 2021. Considerando que el 82 por ciento de las vacunas que Pfizer dice poder producir hasta el año próximo y que el 78 por ciento de las de Moderna ya han sido vendidas a los países ricos, según el grupo de defensa de Justicia Global Ahora, imagínese la probable escasez y los retrasos para el resto del mundo. (Se dice que Canadá ha hecho tantos pedidos anticipados que podría terminar con 10 dosis per cápita).

AstraZeneca, en cambio, ha llegado a acuerdos con fabricantes de la India y América Latina, así como con GAVI, para ayudar a los países pobres a tener acceso a su vacuna. (También se ha comprometido a no obtener beneficios de su vacuna

durante la pandemia, aunque, según un informe del Financial Times basado en documentos de la empresa, AstraZeneca ha conservado el derecho a declarar el fin de la pandemia ya en julio de 2021). Dicho esto, la compañía estima que podrá hacer tres mil millones de dosis para finales de 2021; eso es suficiente para sólo el 20 por ciento de la población mundial.

Los países pobres han enfrentado estos problemas antes. La creación de la OMC en 1995 coincidió con un aumento del VIH/sida en el África subsahariana. En 1996, se desarrollaron nuevos tratamientos que hicieron del SIDA una enfermedad más manejable, aunque sólo para las personas que podían pagarlos. Los medicamentos no genéricos costaban unos 10.000 dólares al año a principios de siglo, y estaban fuera del alcance de muchas personas en, por ejemplo, Sudáfrica. El gobierno sudafricano tardó casi una década en romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén, dejando morir a la gente.

En Brasil, Gilead Sciences, el propietario del monopolio de sofosbuvir, un gran avance en el tratamiento de la hepatitis C, ha estado en un punto muerto con el gobierno por la expansión y el abaratamiento del acceso al medicamento para los brasileños. Según varios informes, cuando Gilead Sciences obtuvo las patentes de sofosbuvir a principios de 2019, subió el precio para los organismos públicos brasileños de 16 dólares a 240 dólares por cápsula. Sin embargo, eso bajaría a unos 8 dólares si el fármaco se produjera localmente bajo un esquema de licencias obligatorias que el acuerdo TRIPs ya permite en algunas circunstancias.

Los países en los que los medicamentos son relativamente baratos, como la India, se enfrentan a otro tipo de desafío: los intentos de anular las leyes que hacen que esos fármacos sean accesibles allí. Novartis, el gigante farmacéutico suizo, libró una batalla de un decenio para asegurar el control del monopolio en la India sobre su tratamiento de la leucemia, y en el proceso trató que una disposición clave de la legislación india sobre patentes fuera anulada por ser inconstitucional. (Fracasó en ambos frentes).

Además, la crisis de acceso a medicamentos asequibles también afecta a los países cuyos gobiernos defienden una amplia protección de la propiedad intelectual para las empresas: la



insulina, por ejemplo, puede ser muy cara en los Estados Unidos.

El Remdesivir, un medicamento utilizado para tratar la COVID-19 (con resultados no concluyentes), escasea ahora en los Estados Unidos y Europa. Gilead Sciences, el fabricante de remdesivir, ha conservado su monopolio sobre el medicamento en los países ricos, pero en mayo firmó acuerdos de licencia con empresas de 127 países para que pudieran producir versiones genéricas para su venta. ¿El resultado? Si bien ha habido escasez del fármaco en Occidente, ha estado disponible en suministros cada vez más estables en varios países pobres, a veces a una décima parte del precio.

Pero los gobiernos de los países ricos también pueden hacer retroceder a las grandes farmacéuticas, y a veces lo han hecho, a pesar de la influencia financiera a veces colosal de esta industria. (Las contribuciones de las campañas y el cabildeo de los fabricantes de medicamentos al gobierno federal de EE.UU. ascendieron a unos 4.700 millones de dólares entre 1999 y 2018, según un estudio reciente). Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos temían un ataque con ántrax y necesitaban suministros inusualmente grandes de ciprofloxacina de Bayer; cuando el gobierno amenazó con pasar por alto la patente de la compañía y comprar alternativas genéricas, la compañía bajó el precio del antibiótico y aumentó los suministros.

En Gran Bretaña, el año pasado, las familias de los niños con fibrosis quística solicitaron al gobierno que suspendiera el monopolio de una empresa sobre Orkambi, el primer tratamiento significativo

de la enfermedad. Después de que los partidos políticos apoyaran la petición, Vertex, el fabricante de Orkambi, accedió a vender el medicamento a un precio mucho más bajo del que inicialmente esperaba.

En cuanto a las vacunas contra el coronavirus y los tratamientos para la COVID-19, otra reunión del Consejo de los TRIPs está programada para el 10 de diciembre; el 16 y 17 de diciembre se reunirá el consejo general de la OMC, uno de los más altos órganos de decisión de la organización. Se espera que los Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña se aferren a su posición.

Sin embargo, la creciente presión de los países pobres en la Organización Mundial de Comercio debería dar a los gobiernos de los países ricos la posibilidad de negociar con sus empresas farmacéuticas para obtener medicamentos y vacunas más baratos en todo el mundo. Apoyarse en esas empresas es lo correcto ante una pandemia mundial; también es la mejor manera de que los gobiernos de los países ricos se ocupen de su propia población, que en algunos casos sufre una escasez más grave de medicamentos que la población de lugares mucho menos prósperos.

El mes pasado, la junta editorial de *The Wall Street Journal* denunció la propuesta de exención de los acuerdos TRIPs presentada por la India y Sudáfrica como un "atracón a las patentes", añadiendo que "sus intentos perjudicarían a todos, incluidos los pobres". Pero de hecho, esos intentos ayudarían a todos, incluyendo a los ricos —si tan sólo los ricos se dieran cuenta de eso—.

VÍCTIMAS DE LA GUERRA ECONÓMICA Y CORONACRISIS

Grupo de Víctimas y Resistencias del Frente Antiimperialista Internacionalista

02/02/2021

Introducción

Los efectos devastadores de la guerra económica sobre los pueblos han hecho que distintas voces se levantaran pidiendo la retirada de las medidas asociadas a las dinámicas de guerra económica. Hay que constatar que dicho llamamiento ha resultado estéril.

La coronacrisis se ha convertido en un instrumento de castigo que se ha sumado al ya impuesto desde la guerra económica. Algunos ejemplos de esta dinámica son:

- La Ley Cesar promulgada por Trump entró en vigor en mitad de la pandemia y en ella endurecía el bloqueo impuesto a Siria en un momento en el que precisa financiación para empezar a reconstruir un país asolado por la guerra.
- Irán, a pesar de que ya en 2018 el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU dictaminó que EE.UU. debía aflojar parte de su programa de asedio económico como castigo al programa nuclear iraní, ha visto como en octubre de 2020 se decretaba el bloqueo casi total de 18 de sus principales bancos por parte de la administración norteamericana. Esta medida, unida a la sanción impuesta en 2019 al Banco central iraní ahoga la capacidad de financiación de un país en medio de la coronacrisis.
- La desvergüenza con Venezuela llega al punto de que Mike Pompeo propuso a finales de marzo el trueque del establecimiento de un gobierno provisional que convocara elecciones antes de un año a cambio de levantar las sanciones económicas.

La coronacrisis no ha abierto grietas en la implacable guerra económica injerencista, pero al menos está poniendo de manifiesto hasta donde se está dispuesto a llegar con las políticas de

bloqueo y apartheid. Nos referimos al caso de Israel, el país que más avanzado lleva el proceso de vacunación de población contra el COVID-19 a nivel mundial y que no sólo no ha aflojado su política de bloqueo es que no ha permitido la vacunación de la población palestina.

El imperio, que siente amenazada su hegemonía, lejos de levantar el pie del acelerador del expolio ha encontrado en la coronacrisis un elemento que hace más duras sus medidas sin coste político ya que cualquier denuncia de carácter humanitario es puesta en cuestión acusada de colaboracionismo con las causas sancionadas.

1. ¿En qué consiste la guerra económica?

Es una estrategia económica injerencista basada en el uso de medidas cuyo principal efecto es debilitar o estrangular la economía de otro estado. Aunque su origen se remonta siglos atrás, es a partir del fin del colonialismo cuando ha sido utilizada profusamente.

Busca el cambio de las políticas desarrolladas por países o gobiernos que no son propicias a los intereses del país u organismo sancionador. Este cambio supone el empobrecimiento del país sancionado, el expolio y apropiación de su riqueza, el control de sus medios de producción y de su fuerza laboral, e incluso de sus instituciones.

Es un tipo de agresión que no suele ir sola, forma parte de un proceso de agresión imperialista más amplio que hemos caracterizado otras veces:

1. Construcción del enemigo.
2. Ruptura de los procesos convivenciales.
3. Deslegitimación de la institucionalidad vigente.
4. Aislamiento internacional.
5. Intervención militar.
6. El negocio de la reconstrucción.



Aunque suele presentarse como un instrumento para doblegar voluntades sin necesidad de conquista militar esto no siempre es así. Serbia, Iraq, Libia o Siria son ejemplos claros de cómo la guerra económica no exime de la guerra convencional abierta.

2. ¿Qué mecanismos utiliza?

Según la intensidad y graduación de las medidas coercitivas puede utilizar uno o varios mecanismos entre los que tenemos: bloqueo comercial de importaciones y exportaciones, bloqueo financiero, restricciones de movilidad, interrupción de los mecanismos de pago internacionales, manipulación del cambio monetario, confiscación de bienes en el extranjero, entre otros. Igualmente forman parte de estas medidas los planes de ajuste estructural y otros préstamos de organismos multilaterales como el FMI que se imponen a los países, y la imposición del dólar como moneda de intercambio comercial.

Instrumentos como los sistemas electrónicos internacionales de intercambios crediticios y financieros como el SWIFT o CHIPS, permiten implantar los bloqueos financieros con una gran eficacia en un tiempo récord.

3. ¿Qué se invoca para poner en marcha estas sanciones?

La batería de excusas es amplia: defender las libertades, derechos humanos y democracia; preservar la paz, prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional; erradicar el riesgo de

proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva; combatir la corrupción, así como el apoyo a países o grupos terroristas y narcotráfico, etc.

Se asedia pero se viste de un tinte "civilizatorio". Se busca "minimizar las consecuencias adversas para quienes no sean responsables" dice la UE en su programa de política exterior, pero la realidad es que ese discurso choca con la realidad. Se habla de respetar el suministro de insumos básicos para las poblaciones, pero al tiempo las políticas de doble uso por las que se vetan productos que puedan tener uso militar hace que elementos tan básicos como el cloro para el tratamiento sanitario del agua no puedan llegar a los sistemas de tratamiento de aguas con las consecuencias sanitarias que esto acarrea.

Junto a la aplicación de estas medidas punitivas podemos encontrar a los países e instituciones sancionadoras ofreciendo programas de carácter humanitario a los países sancionados. Es un doble juego en el que el reconocimiento de una situación humanitaria grave en un país sancionado se convierte en la perfecta excusa para que el llamado imperialismo humanitario justifique su intervención militar.

4. ¿Qué países han sufrido o se les viene aplicando sanciones económicas en diverso grado llegando al bloqueo?

Aunque sin duda EE.UU. es la potencia que más ha desarrollado el mecanismo de la guerra

económica, no se puede despreciar el hecho de en la actualidad una treintena de países sufren en mayor o menor medida sanciones económicas internacionales por parte de la UE y de la ONU.

Algunas de estas sanciones son verdaderos asedios que se prolongan en el tiempo durante décadas. Hacemos relación de las algunas de las más relevantes.

Iraq (desde 1990 hasta su invasión en 2003), Cuba (desde 1962 hasta la actualidad), Irán (desde 1979 hasta estos momentos), Venezuela (especialmente desde la muerte de Chávez en 2013), Corea del Norte (desde la guerra de Corea en 1953 hasta la actualidad), Afganistán (parcialmente desde 2001), Sudán (desde 1997 hasta 2017 en que divide el país y sigue después de esa división), Siria (desde 2011 hasta el día de hoy), Líbano (desde la derrota de Israel ante Hezbolá en 2006), Yemen en plena guerra con Arabia Saudí, o Ucrania después de la disputa por Crimea.

Hay países cuyo desequilibrio de fuerzas es total y su capacidad de respuesta a la agresión injerencista es muy escasa: Burundi, Rep. Centroafricana, Guinea Bissau, o Haití. Son países en los que mantener las sanciones económicas en un momento de pandemia es especialmente sangrante, pero en otros casos donde ese desequilibrio de fuerzas no es tan grande se responde con programas de sanciones recíprocas, es el caso de Rusia o el de la guerra comercial abierta con China por parte de EE.UU. Es más, estos países están poniendo en marcha sus propios sistemas alternativos al SWIFT y al CHIP como forma de eludir o mitigar al menos la capacidad de bloqueo que las potencias sancionadoras tienen hoy en día.

5. ¿Quiénes son los responsables de tomar estas decisiones?

Principalmente EE.UU., la UE y la ONU. Aunque pueda parecer que como aliados van a evitar las sanciones económicas entre ellos conviene tener presente que esto no es así. Ser aliado no te pone a salvo La amenaza de EE.UU a Alemania con la construcción del gasoducto Nord Stream 2 así lo pone de manifiesto. Según una normativa publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de EE. UU., quien colabore con materiales o espacios para el tendido del gasoducto, o equipe barcos para ese fin, o financie el gasoducto, deberá contar con medidas punitivas. "El Ministerio de Exteriores de EE. UU. y el Ministerio de Finanzas están dispuestos a

utilizar todo el espectro de las sanciones para detener la construcción de este gasoducto".

6. ¿Cuáles son los objetivos reales de estas sanciones?

La aplicación de estas sanciones, aunque de carácter económico, tiene un profundo recorrido político. Entre estos objetivos hay que apuntar el de socavar la soberanía del país sancionado desde el punto de vista político, comercial, financiero o geoestratégico sometiendo a las poblaciones a dinámicas de privación severa para que se levanten contra sus gobiernos legítimamente elegidos; la apropiación de sus recursos nacionales; impedir la formación de bloques de poder alternativos al hegemónico; o mantener el control del monopolio nuclear.

7. ¿Qué efectos tienen sobre los estados y sus poblaciones?

En los casos en que las sanciones devienen en verdaderos asedios o bloqueos a países enteros el mecanismo económico tienen unos efectos tremendos para las poblaciones:

Bloqueo encarecimiento de las importaciones escasez hiperinflación pérdida de poder adquisitivo falta de productos básicos (medicamentos, gasolina, repuestos, semillas..) y falta de servicios básicos insatisfacción, penurias, y desesperación revueltas sociales la puerta abierta para el imperialismo humanitario.

Bloqueo retirada de la inversión extranjera y cierre del acceso a los mercados internacionales de deuda, lo que no les exime de tener que seguir pagando los intereses de la deuda ya contraída.

Todo esto en definitiva se concreta en la puesta en entredicho de la viabilidad del país y de sus instituciones; carestía de alimentos con sus secuelas de hambre y muerte; destrucción del sistema de salud; desempleo; paralización de los programas sociales tales como educación, vivienda e infraestructuras; despoblación y emigración hacia países vecinos o incluso hacia la misma nación o naciones responsables de sus desgracias.

El hecho de conocer estos efectos y de la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios, así como del acceso a financiación no solo para acceder a las vacunas sino para evitar los impactos sociales del COVID-19, no han modificado el status de la guerra económica, tan solo la han hecho más cruel si

cabe. Una dinámica que actualiza aquella respuesta de Madeleine Albright cuando se le recordaba si había valido la pena el bloqueo a Irak en los 90 por parte de la ONU, hecho que le costó la vida a más de medio millón de niños, más de los que fallecieron en Hiroshima. Su respuesta fue muy clara: "creo que es una decisión muy dura, pero el precio... pensamos que el precio vale la pena".

8. ¿Qué información tiene la población del país agresor?

Muy poca. Los medios de comunicación habituales se encargan de camuflar la situación y los verdaderos motivos de adopción de estas sanciones, y la población no reacciona como debiera hacerlo.

Algunas de las estrategias pasan por:

- Presentar la guerra económica como sanciones de efectos limitados.
- Ponerla en valor al afirmar que es una alternativa a la intervención militar.
- Desvirtuar los procesos asociados a la guerra económica. Se ocultan sus efectos devastadores sobre las economías locales y lo que se hace es presentar las duras situaciones sociales por las que pasa la población como una consecuencia de la incapacidad de gestión del gobierno al que se quiere acosar y derribar. De este modo los gobiernos víctimas de esta estrategia pasan a ser presentados como verdugos de su propio pueblo.
- Se oculta la arbitrariedad que hay detrás de la implantación de las medidas sancionadoras. ¿De qué le sirve a Irán cumplir sus

compromisos en el programa nuclear si Trump unilateralmente les sanciona igualmente? ¿Cómo es posible que Cuba siga sometida a bloqueo económico cuando en la Asamblea General de la ONU 187 países lo rechazan, 2 se abstienen Ucrania y Colombia, tan solo 3 se oponen EE.UU., Israel y Brasil? La guerra económica va de intereses geopolíticos y estos pueden cambiar sin previo aviso.

- Se pierde la perspectiva de que en toda sanción hay un elemento de castigo y otro de sumisión. De castigo contra el país sancionado, eso es lo que se presenta en los medios. Pero al mismo tiempo de sumisión, ya que cuando EE.UU. sanciona a alguien si alguno del resto de países rompe el cerco es también sancionado. Es decir, hay una cesión de soberanía en toda regla al tener que hacerse cómplice de las políticas imperialistas.

9. ¿Consiguen estas medidas sus fines?

En general no consiguen sus fines, dañan los procesos de desarrollo de los pueblos pero no consiguen sus fines políticos. Las resistencias populares y la toma de conciencia antiimperialista de aquellos que son más castigados hacen que estos mecanismos no triunfen.

A esto se añade el hecho de que países sancionados establezcan lazos de cooperación como la llegada de los buques iraníes a Venezuela, o el que se vayan desarrollando sistemas alternativos al SWIFT por China, Rusia y hasta por la propia UE.



La desigualdad, el racismo y la polarización: las grietas que encumbraron a Trump

David Smith
17/01/2021
elDiario.es

Hay un escena en la película *Mr Smith Goes to Washington* (*Caballero sin espada* en español) en la que su protagonista, James Stewart, mira con una mezcla de adoración y asombro la cúpula del Capitolio de Washington, sede casi sacralizada de la democracia estadounidense.

En los ochenta años que han transcurrido desde entonces han existido múltiples razones para cuestionar el idealismo de Jefferson Smith, interpretado por Stewart. Pero ninguna tan brutal e incómoda como lo sucedido cuando ese mismo Capitolio fue profanado por una turba de seguidores de Trump que se enfrentaron a la policía, saquearon oficinas, alzaron la bandera confederada y ocuparon la silla del vicepresidente Pence en su calidad de presidente del Senado. El resultado de este violento asalto fue la muerte de cinco personas.

Mientras la turba se reunía, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, advirtió que modificar el resultado de las elecciones, la derrota de Trump, lanzaría la democracia a "una espiral de muerte". Horas más tarde, el líder de la minoría, el demócrata Chuck Schumer, evocó el ataque japonés a Pearl Harbor describiéndolo como un "día de infamia".

Carnicería americana

Lo sucedido tiene dos lecturas inmediatas. Por un lado constituye la inevitable realización de guerra de Trump contra Washington. Estos años en el gobierno se ha comportado como líder de los "bárbaros". Sus años alimentando la furia del resentimiento racial, el enfado contra el *establishment* y las teorías de conspiración distorsionadas llegaron a su conclusión natural en la "carnicería americana" que dijo que existía y él supuestamente iba a terminar.

Por otro lado, desencadena una crisis existencial. Hay quienes sugieren que la democracia estadounidense no ha vivido una situación tan precaria desde la guerra civil y que el mito del excepcionalismo americano rara vez ha estado más vacío de contenido. Existe la sensación de que el poder de un país considerado superpotencia global decae con la inexorabilidad con la que lo hizo el Imperio Romano.

Michael Steele, ex presidente del comité nacional republicano, dijo a *The Guardian*: "Dejamos de prestar atención a lo que sucedía a nuestro alrededor. No escuchamos lo que provocaba el dolor, la angustia y las frustraciones de la gente. Nuestro liderazgo político se centró en sus propios intereses, sus reelecciones".

"Nuestra actitud respecto a Estados Unidos era la de ir al extranjero a presumir de lo buenos y mucho mejores que somos, para luego ignorar que eso no es necesariamente cierto. Sobre todo cuando suceden cosas como los casos de George Floyd y Breonna Taylor (afroamericanos asesinados a manos de la policía). Eso, para mí, tiene mucho que ver con lo que está pasando".

La crisis en la democracia

El fracaso de Estados Unidos para llevar a cabo un traspaso pacífico de poderes no pasó desapercibido. Un periódico keniano preguntó: "¿Quién es ahora la república bananera?". El líder de Irán se jactó de que el asalto "muestra sobre todo lo frágil y vulnerable que es la democracia occidental".

¿Cómo ha podido sucederle esto al país más poderoso del mundo y la principal economía del planeta cuando se cumplen 245 años de su independencia? La erosión de la democracia estadounidense tiene múltiples causas, como desigualdad, racismo, desconfianza hacia las instituciones, polarización, el papel los medios y las redes sociales.

Todo esto comenzó antes de la llegada de Donald Trump y continuará una vez deje la presidencia.

Steele dijo: "No hay una cosa concreta que puedas señalar como la verdad absoluta. Es como hacer una sopa con los peores ingredientes posibles y rascarse la cabeza para tratar de entender ¿Por qué no sabe bien? Eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 30 años".

"Se remonta a mucho antes de la elección de Donald Trump, a la ruptura de las normas en la Cámara de Representantes, al abandono de la idea de construir un consenso para abordar los problemas del país. Nos hemos tomado la división en grupos enemigos al pie de la letra. Usamos la división como un garrote contra nuestros adversarios, a quienes convertimos en enemigos en señal de honor, para así racionalizar y justificar nuestras acciones erróneas".

La ensalada de la democracia siempre ha tenido un poso agri dulce. Las mujeres lograron el derecho a votar hace tan sólo un siglo y, pese a logros conseguidos, las minorías aún afrontan prácticas electorales discriminatorias. Cuando Joe Biden asuma el cargo de presidente número 46, será la presidencia número 45 ejercida por un varón blanco.

La historia desde Nixon

El último medio siglo ya llega empañado. El escándalo del Watergate y que Richard Nixon se convirtiera en el primer presidente de Estados Unidos en dimitir dio paso a que Ronald Reagan sembrara una desconfianza activa en el gobierno como estrategia. Recortó los impuestos a los más ricos lanzando el pistoletazo de salida a la brutal desigualdad que se vive hoy.

En la década de los 90, el ascenso de Newt Gingrich a la presidencia de la Cámara de Representantes, el sórdido proceso de destitución del presidente Bill Clinton y la guerra ilegal en Irak lanzada por el presidente George W. Bush socavaron aún más la fe en la clase política. El fin de la guerra fría eliminó la fuerza unificadora de un adversario común. La automatización, la globalización y la crisis financiera de 2008 destrozaron muchas comunidades y dieron aire a un sentimiento de injusticia y rabia contra las élites.

Después llegó un fallo del Tribunal Supremo que en 2010 eliminó muchas de las normas que limitaban los gastos en los que pueden incurrir los grupos de presión para tratar de influir en las

elecciones. Quienes critican la sentencia dicen que favoreció la capacidad de influencia política de los donantes con más recursos, las empresas y quienes se sientan afectados por medidas concretas.

Un informe del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York reveló que un grupo muy pequeño de estadounidenses ejerce "más poder que en cualquier otro momento desde el Watergate al tiempo que la mayoría parece estar desvinculándose de la política". Las elecciones de 2020 costaron casi 14.000 millones de dólares.

Esta última década también ha estado marcada por la elección de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos. La reacción racista también quedó de manifiesto. Primero con el movimiento conservador del Tea Party y después con la llegada de Trump a la política aupado por la invención de que Obama no había nacido en Estados Unidos y por tanto (según la Constitución) no era elegible para ser presidente.

En 2015 Trump lanzó un mensaje nacionalista y xenófobo que prometía construir un muro fronterizo para mantener a los mexicanos fuera del país y "*make America great again*". El asalto en el Capitolio, protagonizado por una turba mayoritariamente blanca, se encontró con un dispositivo de seguridad mucho menor al que se encontraron los manifestantes de Black Lives Matter.

Larry Jacobs, director del Centro para el Estudio de la Política y el Gobierno de la Universidad de Minnesota, explica: "No hay duda de que Estados Unidos está viviendo un cambio generacional histórico. El porcentaje de blancos en el electorado está disminuyendo, dramáticamente, de un 89% en 1980 a cerca de un 68% en 2020, y Donald Trump ha aprovechado la frustración y la disminución de estatus de un grupo de blancos con un nivel de educación muy básico... Ese no es el futuro de Estados Unidos. Esa es la parte de Estados Unidos que siente que está en declive. Donald Trump ha conectado con lo que sienten como ofensas pero el futuro del país es multirracial y multiétnico".

La polarización de los ciudadanos

Estados Unidos ya ha resistido otras crisis políticas antes, pero las grietas necesitan una reparación estructural urgente. Los candidatos republicanos a la presidencia han ganado en número de votos sólo una vez en los últimos 32 años, pero han llegado a la Casa Blanca por el sistema electoral que se basa en el colegio electoral. El Senado,

donde se equipara la voz de los estados grandes con la de los pequeños, se ha convertido en una institución poco representativa.

Debido a la modificación de los distritos electorales, los estados demócratas ahora son más demócratas y los republicanos, más republicanos. Quien habla más alto suele ganar las primarias de los partidos. Por eso QAnon, una organización de defensores de teorías conspirativas que apoya a Trump, han prosperado en círculos republicanos.

Jacobs dice: "Desde principios de los años 70, los partidos políticos cambiaron la manera de elegir a sus candidatos y en un ataque de euforia democrática crearon las elecciones primarias. Las primarias debían dar el poder al pueblo, pero lo que sucedió en realidad es que entregó el poder a los extremistas".

Hoy, la polarización es más evidente en todas las clases, razas, lugares y niveles educativos. Las bases de Biden, que ganó las elecciones de 2020 en 509 condados, abarcan el 71% de la actividad económica de Estados Unidos, mientras que las bases de Trump, sostenidas por la victoria en 2.547 condados, representan sólo el 29% de la economía, según el centro de estudios políticos Brookings Institution.

Cadenas de televisión de la derecha como Fox News, Newsmax y One America News Network y redes sociales como Facebook y Twitter han alimentado la fractura y contribuido a la creación de burbujas de realidad alternativa, llenando el vacío dejado por el declive de la prensa local. Sólo el 60% de los estadounidenses, entre ellos el 23% de los republicanos, creen que la victoria de Biden fue legítima, según una encuesta de la Universidad Quinnipiac.

Los grupos de extrema derecha están en marcha. La convulsión en el Capitolio es indicativa de un ambiente febril que ya el año pasado vio un complot para secuestrar a Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan. El asalto no impidió que 147 senadores republicanos y miembros de la Cámara de Representantes votaran a favor de intentar modificar el resultado de las elecciones.

Ian Bremmer, presidente de la consultora Eurasia, dijo al medio estadounidense Axios que, "ya no se puede meter la democracia de EEUU en el mismo saco que Canadá, Alemania o Japón". "Estamos ahora a mitad de camino entre esos países y Hungría".

Vaso medio lleno

Sin embargo, todavía hay motivos para creer que el vaso está medio lleno. La sociedad civil y los medios de comunicación son robustos. Los tribunales siguen siendo fuertes e independientes y así lo demostraron al rechazar las acusaciones de fraude electoral, que eran falsas. Aunque los intentos por manipular y eliminar votantes no parecen haber terminado, los demócratas acaban de ganar dos puestos clave en puestos clave en Georgia que permiten tomar el control del Senado y cerrar así el círculo de repudio a Trump.

"Hemos tenido la participación más alta en unas elecciones estadounidenses. Joe Biden venció a Donald Trump. Las elecciones al Senado de Georgia son muy importantes; ahí estuvo una vez el centro de la fuerza del partido republicano y fue uno de los estados más racistas de Estados Unidos hace tan sólo medio siglo. Desde el púlpito de Martin Luther King, tenemos un senador negro, el primero de Georgia. Y eso tiene que calar en la historia de Estados Unidos" dice Jacobs.

"No es algo blanco o negro. El fenómeno Trump podría ser un hecho aislado, con recorrido, pero que tal vez no se impondrá. Miro a las elecciones y lo que veo son jueces nombrados por ambos partidos, incluso por el propio Trump, que defienden el estado de derecho. Veo funcionarios electorales, incluyendo a republicanos, haciendo lo correcto. Lo que me pregunto es ¿dónde está el colapso de la democracia? No lo veo. Creo que la gente está sacando demasiadas conclusiones a partir del horror del 6 de enero."

Steele, que ahora asesora al Proyecto Lincoln, un grupo de republicanos contrario a Trump, está de acuerdo en que la idea de que Estados Unidos debería ser relegada de la primera liga de las democracias mundiales es "una mierda". "No se desharán de nosotros con tanta facilidad. Pero es una lección de la que no sólo debemos tomar nota nosotros. Todo el mundo debería hacerlo".

"No creáis que el nacionalismo y el populismo de derechas no os acechan más allá de lo que se ve. Los países que defendemos las oportunidades y las libertades tenemos que trabajar juntos para no sucumbir".

Traducido por Alberto Arce.

La guerra del Sahara y las armas españolas

Juan Carlos Rois

Grupo Tortuga

15/02/2021

Marruecos ha emprendido una escalada bélica en el Sahara como previsible culminación de su pretensión de anexionarse al completo la antigua colonia saharauí española y enterrar, de paso, los planes descolonizadores de Naciones Unidas y el referéndum de descolonización pendiente y que Marruecos siempre ha visto con malos ojos.

La escalada bélica aprovechó la situación de interinidad y vacío de poder vivida en EEUU a finales de 2020. Marruecos rompió el alto el fuego en noviembre de 2020, penetrando en la zona desmilitarizada acordada desde el alto el fuego de 1991. Mas tarde, en su patético salto en el vacío, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre todo el Sahara, legitimando la intervención militar marroquí e Israel se aprestó a establecer relaciones diplomáticas con Marruecos, mientras Francia y España guardaban un aterrador silencio.

Desde entonces asistimos a otra guerra silenciada, de la que sabemos poco aún. Lo cierto es que la situación previa a la ruptura del alto el fuego era de décadas de estancamiento del proceso descolonizador, con la ONU y España, antigua potencia colonial, mirando para otro lado, mientras Marruecos, apoyada por EEUU y Francia, ha venido imponiendo, no sin el recurso de la fuerza bruta y la militarización, su voluntad y sometiendo a los saharauíes a dura represión.

No parece que la guerra traiga buenas noticias para casi nadie. Pero, amén de la autocracia marroquí y los intereses "occidentales" en la región (particularmente de Francia y EEUU, que mueven los hilos), hay un sector que hará de la guerra una oportunidad y un negocio: los señores de la guerra que se han dedicado en los años previos a suministrar a Marruecos el material bélico del que ahora dispone. Y por eso me he querido preguntar si España, la séptima exportadora de armas en el mundo (sexta

en algunos años, porque el puesto del quinto al octavo ciertamente está muy competido), con una cuota del mercado internacional de más del 3%, tendrá algo que ver, por esas casualidades de la vida, con este club de los carroñeros que sacan tajada de la desgracia ajena.

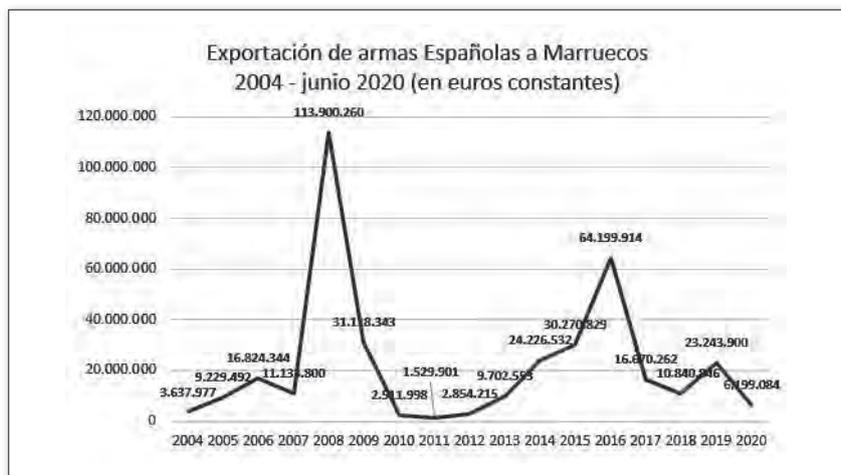
Venta de armas españolas a Marruecos

He intentado sacar algunos datos oficiales sobre la venta de armas españolas a Marruecos durante los últimos años.

Tengamos en cuenta que el mercado de la venta de armas es muy opaco. Junto a los datos oficiales, que dicen las armas que se han vendido o que se han autorizado vender a terceros países, y que proporciona la Secretaría de Estado de Comercio, se encuentra toda una venta opaca e ilegal de armas que es muy complicado acreditar y cuantificar. No en vano, la venta ilegal de armas es uno de los grandes negocios internacionales con volúmenes anuales de más de 350 millones de euros anuales, más de un 2% del comercio de armas mundial.

He elegido un período largo, desde 2004, porque evidencia que la política de alimentar el militarismo marroquí y de mirar para otro lado en el conflicto saharauí es una de esas intocables que llaman política de estado y que no son otra cosa que el consenso vergonzante y vergonzoso del PP y PSOE, ahora también de Podemos, cuando les toca gobernar o pasar a la oposición. Es muy curioso, o a mí me lo parece, que se pongan de acuerdo casi únicamente en cosas como alimentar el militarismo. Desde 2004 al primer semestre de 2020, último del que tenemos datos, España, siguiendo los datos oficiales, vendió de forma legal armas a Marruecos por importes superiores a los 378,10 millones de euros.

Lo vemos en el gráfico siguiente:



Los grandes picos, como por ejemplo el de 2008, se deben a encargos muy importantes de armas, como los más de 1.200 vehículos blindados VAMTAC (como los que utilizaba España en su periplo en Afganistán) y otros 800 camiones militares de UROVESA, así como los 10 patrulleros cuyo uso en guerra resulta más que elocuente. En 2016 se produjo una monumental venta de munición de artillería y antiaérea, así como material de visión nocturna y piezas de aeronaves.

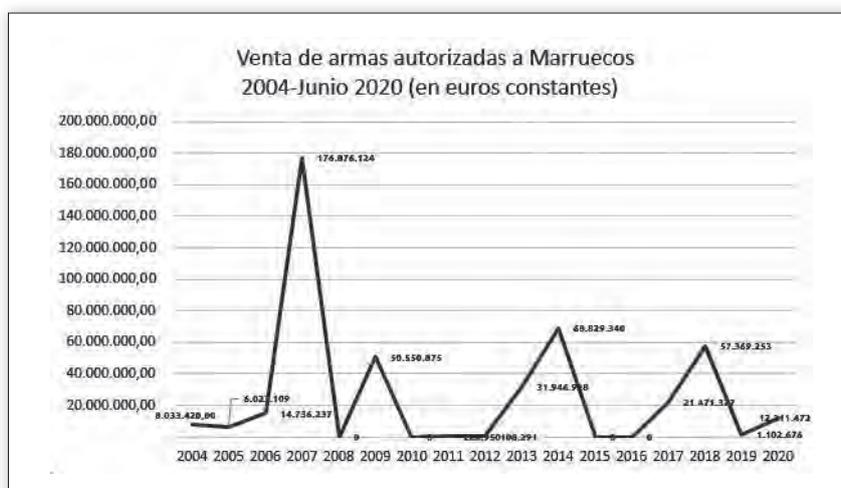
Como decimos, se ha llegado hasta junio de 2020, porque no contamos con datos del semestre siguiente, donde la venta de armas se ralentizó, aunque, a diferencia de otros sectores, no tuvo que cerrar por culpa del Coronavirus.

Por ejemplo, en el caso de Marruecos, en noviembre y en plena escalada bélica marroquí en el Sahara, España ha conseguido vender 130 todoterrenos para la policía marroquí con el objetivo de que "vigilen" la frontera y el tráfico ilegal de

personas. En este caso, la pasta la pone España con fondos de la cooperación al desarrollo, por medio del Fondo Fiduciario de la UE para África del Norte. Ya ven. La venta de armas utiliza también renglones torcidos para sus providenciales designios.

A su vez, España en este período 2004-2020 comprometió venta de armas a futuro por importe de nada menos que de otros 449,49 millones de euros.

Pero esa cifra es engañosa, porque no refleja todo el material de uso militar que España ha exportado o comprometido exportar a Marruecos, ya que, junto al material estrictamente de defensa, España exporta material de doble uso (militar/civil) de aplicación militar, así como material deportivo y de "caza", que también se puede utilizar, y en África es frecuentemente utilizado, como material militar, así como las "armas cortas", en la que España es una gran exportadora.

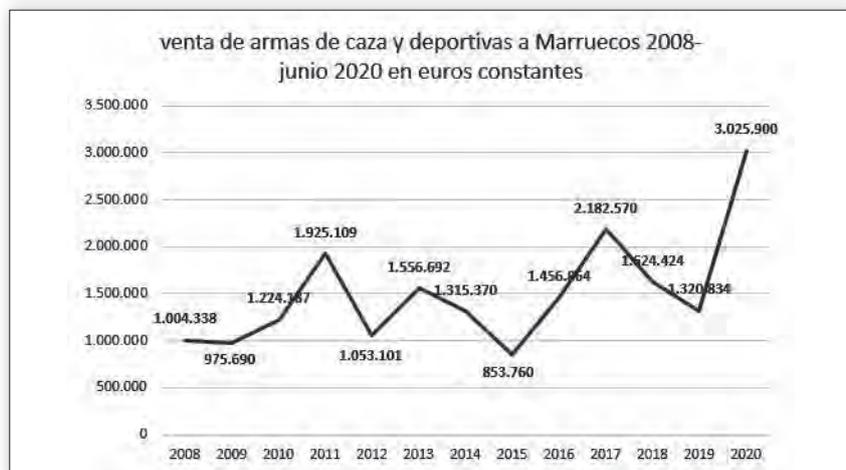
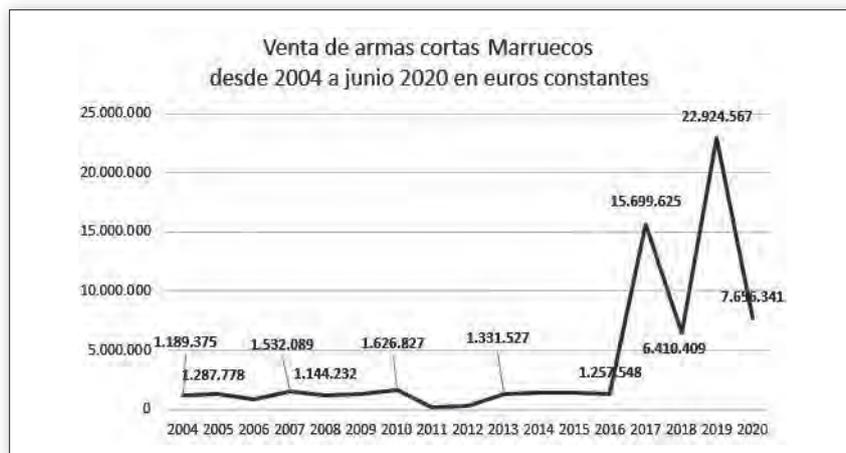
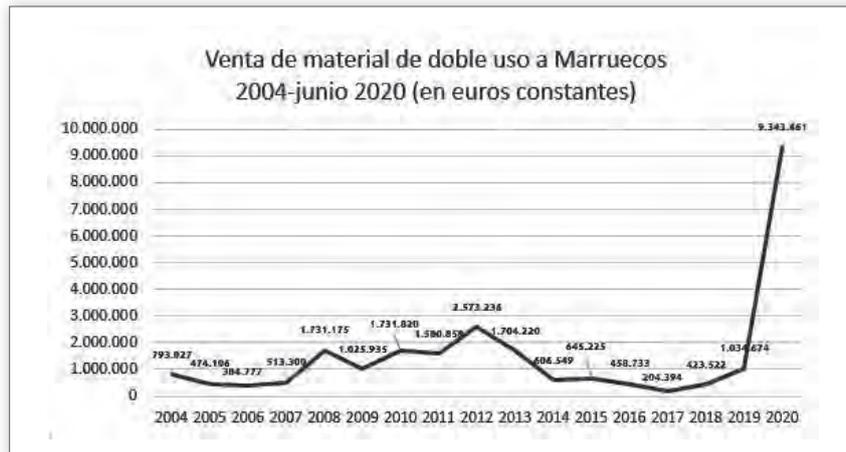


En cuanto al material de doble uso, ha supuesto otros 25,26 millones de euros más, con un incremento importante en el último año, en que sobre todo se han vendido sustancias químicas y toxinas de posible uso militar, así como robots-simuladores y aparatos de mecanización.

El negocio de armas cortas tampoco se ha quedado atrás, con ventas totales de 67,45 millones de euros.

Las armas de caza comportan otro capítulo de venta de nuestra flamante industria militar. Este tipo de armas suponen en África una excusa para la venta de armas que habitualmente acaban participando en conflictos militares. En nuestro caso, desde 2014 hemos vendido a Marruecos la nada despreciable cifra de 19,52 millones de euros.

La suma de todo este material vendido es ingente: 480,33 millones de euros. A ello hay que



sumarla millonada comprometida y aún no suministrada del armamento militar para tener una idea aproximada de nuestra contribución al militarismo marroquí.

¿Qué les vendemos?

A lo largo de toda esta época hemos vendido, principalmente, explosivos, munición, cohetes, camiones y vehículos de infantería, suministros para carros de combate y todo tipo de armamento convencional, sin despreciar tecnología electrónica, productos químicos y biológicos, simuladores y toda una amplia gama de material susceptible de su uso en una guerra como la que ahora desencadenan en el Sahara. Tampoco es esta nuestra única colaboración militar, porque España ha donado a Marruecos vehículos, torpedos, lanzadoras de bombas de caída libre y otro material militar, sin contar con la colaboración de inteligencia y estratégica que se desarrolla con la monarquía marroquí, así como el entrenamiento

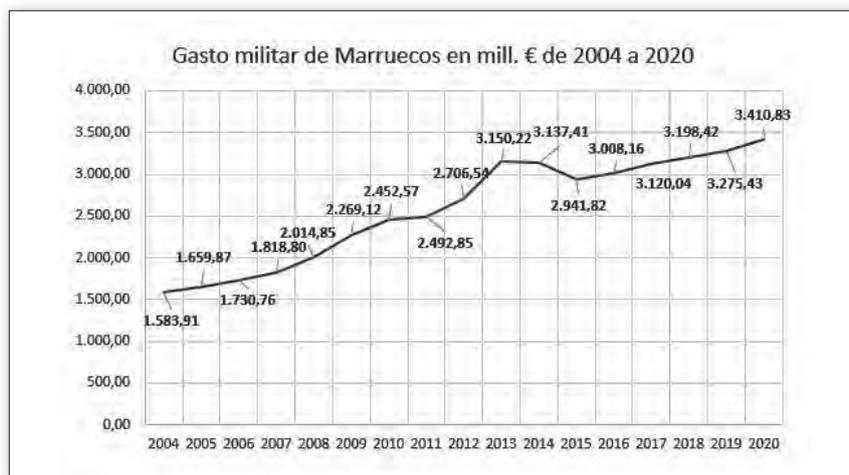
y formación que algunos de los oficiales marroquíes realizan en España y los acuerdos entre ambos países que así lo consignan, la realización de ejercicios y maniobras conjuntas y los otros medios de cooperación militar en los que España participa con Marruecos en el marco de la "iniciativa 5+5".

El gasto militar marroquí

Como ocurre con la mayoría de los países, la estimación del gasto militar marroquí ha de ser tomada con mucho cuidado, principalmente porque parte del mismo no está suficientemente aflorado.

Seguindo al SIPRI, que nos parece al efecto la comparativa más fiable de las que hemos manejado, la suma del mismo desde 2004 a 2019 (último informe del SIPRI) ascenderá a nada menos que 40.560,77 millones de euros, lo que al menos ascenderá a casi 44.000 millones si sumamos el gasto estimado usando otras fuentes para 2020.

Su línea ascendente es importante, como vemos en el cuadro siguiente:





Pero tal vez esta cifra no nos diga nada sin otras comparaciones, como por ejemplo, que el salario mínimo en Marruecos es de 2.698,38 dirhams mensuales, lo que equivale a 248,8 euros, o que el PIB per cápita de Marruecos es de 2.671,5 euros anuales.

Podían pagarse con el enorme gasto militar marroquí nada menos que 13,7 millones de salarios mínimos al año, o cubrirse 1,27 millones de rentas anuales, una bonita manera de salir de la pobreza y la desigualdad que padece gran parte de la sociedad marroquí, dos de los factores que potencian el descontento y la revuelta de amplias regiones de aquel país.

Añadamos que Marruecos destina más del 4,5% de su PIB a gasto militar para tener una idea de la dimensión antisocial de este gasto.

Otros señores de la guerra

Con todo, no somos los únicos ni los principales suministradores de armamento para el militarismo marroquí.

Sin ir más lejos, EEUU, su principal proveedor, les ha suministrado tanques Abrams, aviones de combate F18, helicópteros Apache, aviones de reconocimiento, misiles y otros muchos aparatos de guerra. A finales de 2020 EEUU negoció con

Marruecos la venta de otro tipo de armamento más sofisticado. En concreto, cuatro aviones no tripulados MQ-9 Repair con capacidad de portar armamento guiado por láser.

También Francia, con su agresiva política neo-colonial, aporta a Marruecos material militar para aburrir. Sólo en 2019 firmó acuerdos con la industria militar francesa para reforzar su artillería con suministros de armamento por valor de 400 millones de euros.

Es llamativo que los principales suministradores de armas de Marruecos tengan a su vez un inmenso interés en hacer de éste un peón de su política de dominación. Al fin y al cabo, entre las muchas maneras de hacer la guerra, que la hagan otros por nosotros es una inversión rentable, a pesar de ser tan cínica, y nos permite seguir disfrutando de una posición altamente confortable sin tener que pensar cada día que somos unos imprementables.

Y es así como se construye la neutralidad en nuestro convulso mundo, tirando la piedra y escondiendo la mano. Aunque para este viaje tan sutil de la "izquierda" no habían hecho falta alforjas, digo yo.

Desafiar la supuesta superioridad moral de las corporaciones “Big Tech”

Ricardo Orozco*

Rebelión. 16/01/2021

Si no se cuestiona –desde la izquierda estadounidense y mundial– el poder de las corporaciones que manejan las redes sociales, nada evitaría que estas corporaciones coloquen en el mismo saco a las protestas del movimiento Black Lives Matter (BLM) y al supremacismo blanco.

Las izquierdas del mundo, y en particular las que se despliegan en el espacio político de Estados Unidos y toda América, acaban de recibir uno de sus más agudos reveses, cortesía de los acontecimientos que se sucedieron el pasado 6 de enero, en Washington D.C., de la mano de grupos supremacistas de apoyo a la reelección de Donald J. Trump como presidente de aquella nación. Y es que, en medio de todo el caos que parecía inundar la situación, un par de empresas estadounidenses en el ramo de las tecnologías de la información y la comunicación decidieron silenciar al jefe del ejecutivo federal a través del bloqueo provisional de sus perfiles públicos en redes sociales (*Facebook*, *Instagram* y *Twitter*, de manera particular).

El hecho se dio bastantes horas después de que el mandatario sostuviese un *rally* masivo en el que ofreció un discurso (quizás uno de los más virulentos hasta ahora pronunciados por él en su rol de funcionario público) en el que abiertamente incitaba a sus seguidores y seguidoras a llevar a cabo medidas de movilización y de protesta colectiva más radicales de las que hasta ese momento habían realizado, desde que se dieron a conocer los resultados de las votaciones de noviembre pasado. Y, asimismo, se dio tiempo después de que los y las manifestantes llegasen al seno del capitolio sin mayor resistencia por parte de los cuerpos de seguridad e inteligencia, federales y locales; llevando a los extremos de lo ridículo y lo insultante las diferencias que separan, por un lado, a la brutalidad policial cometida en contra de la comunidad negra y latina en el

país; y por el otro, la inacción operante en contra del supremacismo blanco estadounidense.

El hecho resulta fundamental para la izquierda, y constituye una de sus más grandes derrotas en los últimos años, debido a que la decisión tomada por los CEO de dichas empresas (pertenecientes al grupo de las *BigTech*) no únicamente significó la realización de una demanda que a lo largo de los últimos cuatro años estuvo haciendo la izquierda estadounidense y americana para detener la influencia mediática de Trump entre las masas, sino, asimismo, porque la misma fue aceptada y aplaudida acriticamente por esos mismos sectores de izquierda y otros tantos grupos que se unieron a tal determinación embriagados por los sentimientos desatados por las manifestaciones de supremacistas en la capital del país.

Y es que, en efecto, el hecho de que fuesen las izquierdas locales, regionales e internacionales las primeras en aplaudir las medidas tomadas por las *BigTech* en el ramo de las redes sociales significa que éstas están siendo incapaces de reconocer los peligros que conlleva el aceptar plácidamente que sea la pretendida *superioridad moral* de las personas encargadas de estas corporaciones transnacionales la que dicte aquello que está permitido y aquello que está prohibido proferir en el espacio público, ya sea que éste se manifieste en su dimensión digital (como en *Facebook*, *Twitter* e *Instagram*) o en su dimensión territorial (por medio del control del flujo de información reportado en medios). Después de todo, y aunque la decisión tomada pudiese parecer algo coyuntural –un paso en falso, quizá, pero necesario dada la situación imperante en el momento en el que se dio–, la realidad del momento es que en el silenciamiento del aún

* Ricardo Orozco: Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, @r_zcorazonpolitica.org

presidente en funciones de Estados Unidos se cruzó una línea de la cual no hay vuelta atrás.

Piénsese, para dimensionar en toda su amplitud las consecuencias de las acciones tomadas por las *BigTech* estadounidenses, que lo que ocurrió el pasado 6 de enero fue el silenciamiento mediático total del presidente en turno de una de las potencias políticas, financieras y militares más grandes y agresivas que ha conocido la humanidad en los tiempos modernos; censura, no está demás subrayarlo, que se dio prácticamente sin ningún tipo de represalia por parte del gobierno estadounidense, en general; o del jefe del ejecutivo federal, en particular. Es decir, no fue a cualquier individuo al cual se optó por bloquear de las tres principales redes sociales con presencia en Occidente y en el resto del mundo: fue a una de las personas con mayor poder financiero, político y militar concentrado en sus facultades ejecutivas; y a uno, además, que lo caracteriza el revanchismo, la disputa y la toma de decisiones por arrebato cuando se lo desafía.

¿En dónde, pues, deja paradas esa decisión al resto de las personas que son usuarias de sus plataformas, consumidores y consumidoras. en estado de enajenación total, de sus productos y servicios, siendo ellas poco más que simples mortales sin concentraciones de poder político, financiero o militar remotamente parecidas a las que aún ostenta el presidente de Estados Unidos? Al parecer la izquierda no lo comprende a cabalidad, pero lo que ocurrió el 6 de enero, en Washington D.C., es la concesión, sin ambages, de la superioridad de las corporaciones transnacionales, dominantes en los ramos de las tecnologías de la información y el desarrollo de tecnologías de punta, en la definición de la agenda mediática, del debate público.

Aplaudir las medidas tomadas por las *BigTech* en contra de Trump, en este sentido, es aplaudirles y concederles el derecho de dominar la producción, la circulación y el consumo de la información socialmente producida, dejando sin capacidad alguna de decisión, al respecto, al enorme cúmulo de personas que constituyen sus bases de usuarios y usuarias de sus servicios y productos. Porque la realidad es que, si en el marco de las protestas en la capital estadounidense lo pudieron hacer sin ser objeto de ningún tipo de represalia, en los tiempos por

venir, esa determinación únicamente tenderá a extrapolarse, radicalizarse y generalizarse hacia otras geografías y otros contextos. La manera de lograrlo, además, será navegando por los mares de la política internacional con bandera de izquierda: con consignas en favor de la defensa de la libertad de expresión y la censura objetiva, moralmente necesaria, de todo aquello que consideren constituye un peligro para la libertad y la democracia.

La presidencia de Trump y las protestas experimentadas en la nación a principios de este mes, al respecto, son parte de la explicación a la pregunta sobre cómo es que van a lograr estas corporaciones transnacionales lograr generalizar regímenes de censura y de control de la información más amplios, sistemáticos y herméticos en los tiempos por venir. Y es que, entre la persona del presidente y los actos cometidos por sus *hooligans* en el Capitolio, lo más seguro es que el argumento base empleado para instaurar y ampliar esos regímenes de silenciamiento sea el de la prevención: prevenir que se dé la emergencia, en el futuro, de figuras similares a las del presidente de la nación, prevenir que personalidades así lleguen nuevamente a gobernar en cualquier parte del planeta, prevenir que sus discursos encuentren eco entre las masas; prevenir que se incite la violencia, el odio, la segregación, el supremacismo, etcétera.

El problema acá es, no obstante, que si los criterios empleados para prevenir cualquiera de esas situaciones están dados por los intereses propios y por el arbitrio de las personas al mando de esas corporaciones, nada evita que, al final, el rasero empleado para barrer con la virulencia discursiva de Trump sea utilizado, asimismo, para eliminar, censurar, silenciar, marginar a todos aquellos actores que se opongan a los intereses corporativos de las *Big Tech* —o de sus gobiernos, cuando exista comunidad de intereses entre aquellas y estos—. De hecho, si se observa lo anterior de cara a los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Estados Unidos en el último año, nada evitaría, en esta línea de ideas, que, en última instancia, estas corporaciones decidan colocar en el mismo saco a las protestas del movimiento *Black Lives Matter* (BLM) y al supremacismo blanco, tributario del *Ku Klux Klan* (KKK). Así es, por lo menos, como ha ocurrido desde las movilizaciones más grandes



promovidas por el BLM, en cuyo contexto algunas plataformas de redes sociales censuraron los mensajes, las reflexiones y las convocatorias a la movilización emitidas por figuras destacadas del movimiento.

En el plano internacional, por otro lado, nada evitaría, en la misma tónica, que, bajo el argumento de que constituyen un peligro para la libertad y una amenaza para la paz, la estabilidad, la seguridad y/o la democracia, mandatarios y/o movimientos sociales de América o de otras regiones del mundo sean silenciados y objeto de campañas mediáticas de desprestigio por parte de estos intereses empresariales. Esto, por supuesto, ya ocurre, y tiene una larga tradición, en particular, en el caso de la prensa, la radio y la televisión (el caso CNN en contra de Cuba y Venezuela es paradigmático). Sin embargo, el cambio cualitativo, acá, sería el replicar la acción que se tomó en contra de Trump, lo cual ya no supone un ataque por parte de presentadores y/o comentócratas al frente de una sección específica o como voceros de una corporación dada, sino, antes bien, el embate directo por parte de una institución privada que, en muchos casos, es varias veces más rica y financiera y mediáticamente más poderosa que un gobierno nacional completo (si se compara el tamaño de la

economía de un Estado de América Central o del Caribe frente a la capitalización de mercado de una empresa como *Facebook* o *Google*, las distancias que se abren entre una y otra quedan perfectamente clarificadas).

Y es que, el punto aquí es que, al haber dado su consentimiento para silenciar a Trump, de alguna manera, la izquierda renunció al derecho a defender la libertad de expresión para todos aquellos y todas aquellas que militan en su propio espectro ideológico de la política; esto es, en la izquierda. Seguro, el supremacismo de Trump y del *trumpismo* son una amenaza de derecha, conservadora, siempre latente de radicalizarse. El problema es, no obstante, que la decisión tomada por las *BigTech* no tiene sólo a Trump como su objetivo: todos y todas nos encontramos, ahora mismo, ahí, en el lugar que actualmente ocupa el aún presidente estadounidense. El personaje y sus *hooligans* son despreciables, sí; los discursos supremacistas deben ser silenciados, sí; deben ser combatidos, sí; deben ser criticados, sí. Pero también debe ser combatido y criticado el ejercicio de poder que ejercen las empresas que controlan los medios de comunicación.

Cuando son ellas las que callan a los supremacistas, no se debe perder de vista que son

ellas, de igual modo, las que le dan un sentido, una dirección, a los medios y a su utilización, no sólo en lo concerniente a esos perfiles de la gran política, sino en lo que toca a la totalidad de usuarios y usuarias con los que cuentan en sus registros. De ahí que el tema de fondo, en esta problemática, no sea la defensa del discurso supremacista de Trump y/o de sus seguidores, sino, por lo contrario, la defensa del imperativo que indica que no deben ser los intereses corporativos los que tengan la última palabra en el control de la producción, circulación y consumo de información en una sociedad dada. Si los discursos supremacistas deben ser silenciados porque en ellos siempre existe el riesgo de llegar

a experiencias como las del fascismo occidental o las del autoritarismo en América, y porque, además, incluso si no llegan a materializarse en experiencias políticas tales, son contenidos discursivos que jerarquizan y justifican la explotación de unos sectores sociales por otros; ello, en fin, debe darse por acción y efecto de la propia colectividad en la cual se da el despliegue de esos discursos. Es decir, la decisión debe de estar en manos de la colectividad.

Que el desprecio por la persona de Donald J. Trump no conduzca a la izquierda y a las sociedades americanas a aceptar a las hienas como una mejor alternativa ante el lobo.



BOSSWARE

un recorrido por las aplicaciones de vigilancia en el teletrabajo

*Bennet Cyphers y Karen Gullo**
SinPermiso
05/09/2020

El COVID-19 ha obligado a millones de personas a trabajar desde casa, y una multitud de marcas de software para vigilancia de trabajadores se han lanzado a promocionar masivamente sus productos a las empresas de todo el país.

A menudo el software al que nos referimos es presentado como relativamente inocuo: Algunos proveedores lo comercializan como software para “el seguimiento automático de tiempo” o de “análisis del lugar de trabajo”, mientras que otros productos se dirigen a empresas preocupadas por el robo de propiedad intelectual o el robo de datos. Nosotros llamamos a estas herramientas, conjuntamente, *bossware*.

Si bien la pretensión comercial de estos productos es ayudar a las empresas, queremos explicar por qué el *bossware* pone en peligro la privacidad y la seguridad laboral de los trabajadores. Por ejemplo, en algunos casos, estos programas están diseñados para registrar cada clic y cada interacción con el teclado y para recopilar información de forma encubierta con fines punitivos o disciplinarios, además de utilizar otras funciones de espionaje que van mucho más allá de lo que es necesario y proporcionado para organizar el teletrabajo.

Aunque el hogar se convierta en una oficina, sigue siendo un hogar. Los trabajadores no deben estar sujetos a vigilancia no consensuada ni a ser controlados en sus propios hogares para mantener sus empleos.

¿Qué pueden hacer estas herramientas?

El *bossware* normalmente se aloja en un ordenador o en un smartphone y tiene permiso para acceder a los datos de ese dispositivo. La mayoría del *bossware* recoge aproximadamente todo lo que hace el usuario. Hemos revisado publicidad,

demos y comentarios de los clientes para hacernos una idea completa de cómo funcionan estos programas. No obstante, dada la gran cantidad de programas de este tipo que se encuentran actualmente en el mercado, vamos a desglosar las diferentes formas de vigilancia que existen por categorías.

El tipo más amplio y común de vigilancia es el “monitoreo de actividades”. Normalmente, el monitoreo abarca también un registro de las aplicaciones y sitios web que visitan los trabajadores, por ejemplo, las herramientas de mensajería (el *bossware* revisará desde el asunto del email hasta otras clases de metadatos) y cualquier publicación que se realice en redes sociales. La mayoría de los programas también registran los niveles de entrada del teclado y del ratón y muchos de ellos ofrecen un desglose de cuánto teclea y hace clic minuto a minuto un usuario, bajo la premisa de llevar a cabo un registro de la productividad. El software de vigilancia tratará de reunir todos estos datos en sencillos gráficos que ofrezcan a los empleadores un resumen detallado de la diligencia de los trabajadores.

Todos los productos que hemos revisado realizan continuas capturas de pantalla de los

* **Bennett Cyphers** es miembro del Tech Projects team. Escribe sobre una variedad de temas en Electronic Frontier Foundation: privacidad de los consumidores, competencia y regulación estatal. También asiste en el desarrollo de Privacy Badger.

Karen Gullo es escritora. Lleva informando más de una década sobre asuntos públicos, negocios, gobierno y legislación. Ha sido reportera para Bloomberg y The Associated Press. Ha sido ganadora del premio Jesse H. Neal de periodismo de negocios y el San Francisco Peninsula Press Club a la excelencia periodística.

dispositivos. En algunos casos, llegan a emitir vídeo en directo. Después, esta enorme cantidad de contenido audiovisual es organizada en una línea de tiempo, de modo que los jefes pueden retroceder a través del día de un trabajador y ver lo que estaban haciendo en un momento determinado.

Varios productos actúan como registros de teclas, anotando cada pulsación, incluyendo correos electrónicos no enviados y contraseñas privadas. Dos de ellos permiten incluso a los administradores entrar y tomar el control del escritorio de un usuario. Es importante señalar, que este proceso de registro no suele distinguir entre la actividad laboral y las credenciales de las cuentas personales, los datos bancarios o la información médica.

Algunos tipos de *bossware* van más allá, llegando al mundo físico que rodea a los dispositivos. Las empresas que ofrecen software para dispositivos móviles casi siempre incluyen el seguimiento de la ubicación utilizando el GPS. Al menos dos servicios –StaffCop Enterprise y CleverControl– permiten a los empleadores activar secretamente las cámaras y los micrófonos del ordenador o del teléfono móvil.

En general, el *bossware* puede ser instalado de dos formas: como una aplicación visible para el trabajador (y tal vez incluso manipulable por él) o como un proceso silencioso que los trabajadores no pueden ver. La mayoría de las empresas que hemos estudiado dan a los empleadores la opción de instalar su software de ambas maneras, que recogemos como vigilancia visible e invisible.

Vigilancia visible

Hay situaciones en que los trabajadores pueden reconocer el software que los vigila y tienen la opción de activar o desactivar la vigilancia, como una forma de fichar las entradas y salidas del horario laboral. Por supuesto, el hecho de que un trabajador haya desactivado la vigilancia será visible para su empleador. Por ejemplo, con Time Doctor, los trabajadores tienen la opción de eliminar determinadas capturas de pantalla de su sesión de trabajo; sin embargo, al borrar una captura de pantalla también se borrará el tiempo de trabajo asociado, de modo que los trabajadores sólo serán remunerados por el tiempo durante el cual se les supervisa.

Los empleados pueden tener acceso a una parte o a toda la información que se recopile sobre ellos. Crossover, la empresa que está detrás

de WorkSmart, compara su producto de vigilancia con una aplicación de entrenamiento deportivo. Su interfaz permite a los trabajadores ver los resultados del sistema sobre su actividad presentados en una serie de gráficos y tablas.

El nivel de transparencia hacia los trabajadores dependerá de la marca. Algunas dan a los trabajadores acceso a una cantidad variable de información. Otras, como Teramind, indican simplemente que están encendidas y recabando datos, pero no revelan todo lo que están recogiendo. En cualquiera de los casos, a menudo el usuario no tiene claro qué información se está seleccionando exactamente, a no ser que lo consulte directamente con su superior o se examine cuidadosamente el propio programa informático.

Vigilancia invisible

La mayoría de las compañías que construyen software de vigilancia visible también crean productos que tratan de esconderse de las personas que están monitoreando. Teramind, Time Doctor, StaffCop, y otras compañías hacen productos que están diseñados para ser tan difíciles de detectar y eliminar como sea posible. A nivel técnico, estos productos son indistinguibles de un troyano. De hecho, algunas marcas para ser instaladas requieren que los empleadores reconfiguren específicamente el antivirus antes de instalar sus productos, para que este no detecte y bloquee la actividad no deseada.

Aunque este software se comercializa con un propósito específico (la supervisión de trabajadores), la mayoría de estos productos también sirven como herramientas de vigilancia de carácter general. StaffCop ofrece una versión de su producto específicamente diseñada para supervisar el uso de Internet por parte de los niños, y ActivTrak afirma que su software también puede ser utilizado con este mismo fin por padres o profesores. Los comentarios de los clientes sobre algunos de los programas indican que muchos de ellos los utilizan en sus hogares.

La mayoría de las empresas que ofrecen vigilancia invisible recomiendan que sólo se utilice para los dispositivos en propiedad de la compañía. Sin embargo, muchas también ofrecen características como la instalación remota y “silenciosa” del software en los dispositivos privados de los trabajadores, incluso si estos están fuera del lugar de trabajo. Esto es posible porque muchos empleadores tienen privilegios de acceso en los

ordenadores que distribuyen. El problema radica en que para algunos trabajadores el portátil de la compañía es su único dispositivo, por lo que la supervisión de la empresa está siempre presente, facilitando un posible uso excesivo por parte de los empleadores. Es posible que las víctimas nunca sepan que están sujetas a tal vigilancia.

La siguiente tabla muestra las características de supervisión y control disponibles entre diferentes marcas de *bossware*. No se trata de una lista exhaustiva, y puede que no sea representativa de la totalidad de la industria, sino de las marcas de referencia en el sector y de las características que estas publicitan en el mercado.

	Vigilancia de actividad (apps, webs)	Capturas o grabaciones de pantalla	Registros	Activación de webcam o micrófono	Pueden ser "invisibles"
ActivTrak	confirmado	confirmado			confirmado
CleverControl	confirmado	confirmado	confirmado	confirmado	confirmado
DeskTime	confirmado	confirmado			confirmado
Hubstaff	confirmado	confirmado			
Interguard	confirmado	confirmado	confirmado		confirmado
StaffCop	confirmado	confirmado	confirmado	confirmado	confirmado
Teramind	confirmado	confirmado	confirmado		confirmado
TimeDoctor	confirmado	confirmado			confirmado
Work Examiner	confirmado	confirmado	confirmado		confirmado
WorkPuls	confirmado	confirmado			confirmado

Características de varios productos de vigilancia de los empleados, basados en el material publicitario de las propias compañías. 9 de 10 de estos productos de software ofrecían vigilancia "silenciosa" o "invisible", que puede recopilar datos sin el conocimiento del trabajador.

¿Es habitual el *bossware*?

El negocio de la vigilancia de los trabajadores no es nuevo y ya era bastante importante antes de la pandemia mundial. Si bien es difícil evaluar cuán común es el *bossware*, sin duda se ha vuelto mucho más habitual a medida que los trabajadores se ven obligados a trabajar desde sus hogares debido al COVID-19. Awareness Technologies, propietaria de InterGuard, afirmó haber aumentado su base de clientes en más de un 300% en sólo las primeras semanas después del estallido de la pandemia y muchos de los vendedores que

hemos estudiado explotan el auge del COVID-19 en sus campañas de marketing.

Algunas de las empresas más grandes del mundo usan *bossware*. Los clientes de Hubstaff incluyen a Instacart, Groupon y Ring. Time Doctor afirma tener 83.000 usuarios; sus clientes incluyen a Allstate, Ericsson, Verizon, y Re/Max. ActivTrak es utilizado por más de 6.500 organizaciones, incluyendo la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Emory y las ciudades de Denver y Malibú. Compañías como StaffCop y Teramind no revelan información sobre sus clientes, pero afirman ser empleados por sectores como el

cuidado de la salud, la banca, la moda, la industria manufacturera y los *call centers*. Las valoraciones que hacen los propios clientes de estas marcas nos pueden dar más ejemplos de cuánto se ha extendido el uso de estos programas.

No sabemos cuántas de estas organizaciones optan por utilizar la vigilancia invisible, ya que los propios empleadores no suelen publicitarlo. Además, no hay una forma fiable de que los propios trabajadores lo sepan, ya que muchos programas informáticos invisibles están diseñados explícitamente para eludir la detección. Algunos trabajadores tienen contratos que autorizan ciertos tipos de vigilancia e impiden otros, pero para muchos de ellos puede ser imposible saber si están siendo vigilados. Por esta razón, aquellos que se preocupen por esta posibilidad deben asumir que cualquier dispositivo proporcionado por el empleador los está vigilando.

¿Para qué se utilizan los datos?

Las marcas de *bossware* comercializan sus productos para una amplia variedad de usos. Algunos de los más comunes son el seguimiento del tiempo y de la productividad, el cumplimiento de las leyes de protección de datos y la prevención del robo de propiedad industrial o intelectual. En algunos casos, su uso puede resultar razonable: por ejemplo, las empresas que tratan con datos confidenciales están obligadas a asegurarse de que estos no sean filtrados o se roben de sus sistemas. Si los empleados trabajan fuera de la empresa, puede requerir un cierto nivel de supervisión en el dispositivo. Sin embargo, un empleador no debería realizar ningún tipo de vigilancia con fines de seguridad a menos que pueda demostrar que es necesaria, proporcionada y adecuada para los problemas que está tratando de resolver.

Lamentablemente, en muchos casos los empleadores ejercen un poder no justificado sobre sus trabajadores. La mayoría de los productos que hemos examinado están diseñados para la "supervisión de la productividad" o para un mejor seguimiento del tiempo de trabajo; es decir, para registrar todo lo que hacen los trabajadores y asegurarse de que están trabajando lo suficientemente duro. Algunas empresas consideran que sus herramientas son una ventaja potencial tanto para los empresarios como para los trabajadores. Recopilar información sobre cada segundo del día de un trabajador no sólo es bueno para

las compañías, afirman, sino que supuestamente también ayuda al trabajador. Otros proveedores, como Work Examiner y StaffCop, se dirigen explícitamente a los gerentes que no confían en su personal. Estas empresas suelen recomendar que se vinculen los despidos o las bonificaciones a las evaluaciones de rendimiento derivadas de sus productos.

Algunas empresas comercializan sus productos directamente como instrumentos punitivos o como herramientas para recopilar indicios contra los trabajadores. InterGuard anuncia que su software "puede ser instalado silenciosamente y de forma remota, para que usted pueda llevar a cabo investigaciones encubiertas [de sus trabajadores] y reunir datos *a prueba de balas* sin alarmar al sospechoso". Esta prueba, continúa, puede ser usada para luchar contra "reclamaciones frente al despido". En otras palabras, InterGuard puede proporcionar a los empleadores una cantidad astronómica de información privada y secreta para tratar de anular los recursos legales de los trabajadores contra el trato injusto.

Ninguno de estos casos de uso, ni siquiera los menos perturbadores mencionados anteriormente, justifican la cantidad de información que el *bossware* recopila. Y nada en absoluto excusa que se oculte el hecho de que la vigilancia se está llevando a cabo.

La mayoría de los productos hacen periódicamente capturas de pantalla, y solo algunos de los programas permiten a los trabajadores elegir cuáles compartir. Esto implica que la información médica, bancaria o personal sensible se captura junto a emails trabajo y redes sociales. Los productos que incluyen registradores de teclas son aún más invasivos y a menudo terminan capturando las contraseñas de las cuentas personales de los trabajadores.

Descripción de Work Examiner de su función de registro de teclas, destacando específicamente su capacidad para capturar contraseñas privadas.

Desafortunadamente, la excesiva recopilación de información a menudo no es un accidente, sino una prestación más. Work Examiner anuncia específicamente la capacidad de su producto para almacenar contraseñas privadas. Otra empresa, Teramind, informa sobre cada dato que se introduce en un correo electrónico a un cliente, incluso si esa información se borra posteriormente.

Varios programas también analizan cadenas de texto de mensajes privados en redes sociales para que los empleadores puedan conocer los detalles más íntimos de las conversaciones de los trabajadores.

Seamos claros: este software está diseñado específicamente para ayudar a los empleadores a leer los mensajes privados de los trabajadores sin su conocimiento ni su consentimiento. En cualquier caso, esto es innecesario y poco ético.

¿Qué se puede hacer?

Amparados por la legislación de los Estados Unidos, los empleadores tienen demasiada libertad para instalar software de vigilancia en los dispositivos que poseen. Además, poco les impide coaccionar a los trabajadores para que instalen este software en sus propios dispositivos (siempre y cuando la vigilancia se pueda desactivar fuera del horario laboral). Los estados tienen diferentes normas sobre lo que los empleadores pueden y no pueden hacer. En cualquier caso, es habitual que los trabajadores tengan pocos recursos legales frente al software de vigilancia intrusiva.

Esto puede y debe cambiar. A medida que las legislaciones de los estados y del país continúan adoptando leyes de privacidad de los datos de los consumidores, también deberían establecer sistemas de amparo para los trabajadores con respecto a sus empleadores. Para empezar:

- La vigilancia de los trabajadores, incluso en los dispositivos en propiedad del empleador, debe ser imprescindible y proporcionada.
- Los dispositivos deben reducir al mínimo la información que recogen y evitar la captura de datos personales como mensajes privados y contraseñas.
- Los trabajadores deben tener derecho a saber qué información están recopilando sus empleadores.
- Y los trabajadores necesitan recursos legales para que puedan demandar a los empleadores que violen estas protecciones legales de la privacidad.

Mientras tanto, los trabajadores que estén en conocimiento de la vigilancia ejercida por la empresa podrán establecer un diálogo con la misma para alcanzar pactos y las empresas que han incorporado el *bossware* deberán considerar cuáles

son sus objetivos y tratar de alcanzarlos de la manera menos intrusiva. De hecho, el *bossware* a menudo incentiva los tipos de productividad inadecuados, por ejemplo, forzando a la gente a pasear deliberadamente el ratón y a escribir cada pocos minutos en lugar de leer o detenerse a pensar. El monitoreo constante puede ahogar la creatividad, disminuir la confianza y contribuir al agotamiento. En el caso de que a los empleados les preocupe la seguridad de los datos protegidos, deberían considerar herramientas que se adapten específicamente a las amenazas reales y que reduzcan al mínimo los datos personales atrapados en el proceso.

Si el trabajador sospecha que su empleador le está vigilando y desconoce el alcance de la situación, debería asumir que los dispositivos de trabajo capturan y recopilan todo, desde el historial web hasta los mensajes privados y las contraseñas. Si es posible, deberá evitar el uso de los dispositivos de trabajo para fines personales. Y si se pide a los trabajadores que instalen software de vigilancia en sus dispositivos personales, deberían solicitar a sus empleadores un dispositivo alternativo específico para el trabajo.

Por último, es posible que los trabajadores no se sientan cómodos cuestionando la vigilancia por la preocupación de perder el trabajo en un momento de desempleo récord. La elección entre la vigilancia y el desempleo no debería ser una elección en absoluto.

El COVID-19 ha creado nuevas tensiones en todos nosotros, y es probable que también cambie fundamentalmente la forma en que trabajamos. Sin embargo, no debemos dejar que marque el comienzo de una nueva era de vigilancia. Vivimos más que nunca a través de nuestros dispositivos, haciendo fundamental el derecho de mantener nuestras vidas digitales en privado, alejadas de gobiernos, empresas tecnológicas y de nuestros empleadores.

Fuente:

<https://www.eff.org/deeplinks/2020/06/inside-invasive-secretive-bossware-tracking-workers>

Traducción: Guillem Matas Cerdán

Trabajadores de Amazon luchan para formar su primer sindicato

Guido Vassallo

21/02/2021

Página12

El gigante del comercio electrónico es el segundo mayor empleador de Estados Unidos. La mayoría de sus trabajadores manuales y esenciales se vieron severamente afectados por la pandemia de coronavirus.

Una de las principales compañías tecnológicas del mundo tiene motivos para empezar a preocuparse. Al menos 5.800 trabajadores de un centro de distribución de Amazon comenzaron a votar esta semana para decidir si se unen al Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Departamentales (RWDSU). Las boletas se envían por correo a los trabajadores del almacén ubicado en la ciudad de Bessemer, Alabama, y la votación se extiende hasta el 29 de marzo. Amazon es el segundo mayor empleador estadounidense con más de 800 mil asalariados, la mayoría de los cuales son trabajadores esenciales cuyas condiciones se vieron deterioradas por la pandemia de coronavirus.

La compañía fundada por Jeff Bezos está presionando agresivamente a sus empleados para que rechacen la iniciativa colectiva. "Reciben a diario múltiples mensajes de texto en sus teléfonos. Son bombardeados con proclamas antisindicales dentro de las instalaciones, incluso con carteles en los baños", explica en diálogo con *Página/12* John Logan, profesor y Director de Estudios de Trabajo y Empleo en la Universidad de San Francisco. Así ha operado Bezos en sus 27 años como CEO: buscando mantener atomizada a la clase trabajadora para torcerla.

Pero mal que le pese al hombre más rico del mundo, los sindicatos se están empezando a

abrir en la industria tecnológica estadounidense. El mes pasado, en un anuncio igual de llamativo, cientos de ingenieros de software y programadores de Google cuyo sueldo medio ronda los 200 mil dólares anuales presentaron su propio sindicato.

Aunque a diferencia de lo que sucede en Google, quienes están liderando los esfuerzos para sindicalizarse en Amazon son trabajadores en su mayoría manuales y cuyas reivindicaciones se ajustan a las tradicionales: mejores salarios y condiciones laborales. "Las leyes federales y estatales deben reformarse para facilitar la sindicalización de los trabajadores y dificultar que las empresas tomen represalias contra los trabajadores que intentan ejercer sus derechos", asegura Victor Chen, sociólogo y profesor de la Universidad de Virginia.

Víctimas de la pandemia

Los trabajadores de los almacenes de Amazon en Alabama empezaron a organizarse poco después de que el año pasado estallaran las protestas del Black Lives Matter, destacando el daño que la pandemia generó fundamentalmente sobre las minorías. Más del 80 por ciento de los trabajadores de la ciudad de Bessemer son negros y la mayoría son mujeres: por eso el sindicato enmarcó la campaña como una cuestión de derechos civiles.

"Muchos trabajadores de la primera línea sienten que a las empresas no les importa mucho su seguridad y bienestar. Las corporaciones se apuraron a hacer declaraciones públicas preocupándose por sus empleados cuando empezó la pandemia, incluso ofreciendo 'hero pay' (paga de héroe) y otros beneficios a los trabajadores en mayor riesgo. Pero esos gestos desaparecieron rápidamente y las corporaciones volvieron a sus prácticas habituales", cuenta a este diario Chen.

En los almacenes de Amazon, 20 mil trabajadores llegaron a infectarse en solo 6 meses.

De la mano de la pandemia se motorizaron protestas que terminaron con las caras más visibles de los reclamos sumariadas o directamente despedidas. La situación se hizo más visible el miércoles pasado, cuando la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, demandó a Amazon por "indiferencia flagrante" al no tomar las medidas suficientes para proteger a sus trabajadores.

James inició su investigación sobre las prácticas laborales de Amazon tras el despido de Christian Smalls, uno de los empleados del almacén de Staten Island que demandó públicamente mejoras en el cuidado de los trabajadores al inicio de la pandemia. "Los trabajadores de una variedad de sectores están empezando a darse cuenta de que sin sindicatos y convenios colectivos tienen muy poco control sobre la mayoría de los aspectos de su trabajo", manifiesta Rebecca Givan, profesora asociada de la Escuela de Management y Relaciones Laborales en la Universidad de Rutgers.

Forzar la división

"Amazon ha contratado poderosos bufetes de abogados y consultores que se especializan en derrotar los intentos de organización de los trabajadores, intentando aprovechar todas las lagunas de la ley sobre certificación sindical para retrasar el proceso", sostiene Logan. También contrataron a un consultor llamado Russell Brown para intentar frustrar las elecciones sindicales. Brown es el director de RWP Labor, que se promociona como una empresa especializada en ayudar a las compañías a "mantener un lugar de trabajo libre de sindicatos".

Amazon viene siendo noticia en los principales medios estadounidenses por una serie de repudiables actitudes tomadas frente a sus empleados. A principios de este mes se supo que el gigante del comercio electrónico se quedó con 61,7 millones de dólares en propinas que sus clientes le habían entregado a los repartidores, de acuerdo a una investigación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. El caso se dio en el marco del programa Flex de Amazon, en el

que los repartidores trabajan de forma autónoma utilizando sus propios vehículos.

Apenas unos días después Amazon confirmó sus planes de instalar cámaras dotadas de inteligencia artificial en sus vehículos de reparto, lo que describió como parte de una iniciativa para "velar por la seguridad de los conductores". Las cámaras están diseñadas para monitorear a la vez a las rutas y los empleados. "Este tipo de actividades son en gran medida legales y, sin embargo, violan los derechos de los trabajadores", dice Chen.

Biden y después

En un tuit que tomó a varios por sorpresa, el 4 de febrero el presidente Joe Biden aseguró: "Todo estadounidense merece la dignidad y el respeto que conlleva la organización sindical y la negociación colectiva. La política de nuestro gobierno es fomentar la organización, y los empleadores deben asegurarse de que sus trabajadores tengan la opción libre y justa de afiliarse a un sindicato".

Givan, la experta de Rutgers, afirma que la legislación laboral en Estados Unidos es "relativamente hueca" y que los trabajadores del sector privado apenas tienen la posibilidad de sindicalizarse. "Para restablecer este derecho será necesario realizar una reforma significativa de la legislación laboral", plantea Givan. En un país en el que, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, la afiliación sindical cayó a un mínimo histórico del 10,3 por ciento en 2019, Biden se comprometió a ser el "presidente más pro-sindicalista" de la historia. ¿Cumplirá con su promesa?

"Las tasas de sindicalización son muy bajas por lo que la mayoría de los trabajadores no tienen experiencia en organización. Pero algunos se han frustrado lo suficiente como para comenzar a actuar colectivamente", advierte Givan. Por su parte Logan asegura que si el plan de los trabajadores prospera estará dejando un claro mensaje a los trabajadores de todo el país que están tratando de formar un sindicato: "Si puedes enfrentarte a Amazon, puedes enfrentarte a cualquiera".

<https://www.pagina12.com.ar/>

Las estrellas solo se ven en la oscuridad

Agustín Moreno
Cuarto Poder
25/01/2021

"Siempre parece imposible hasta que se hace".

NELSON MANDELA (después de ganar la batalla al *Big Pharma* con los genéricos para el VIH)



Es importante empezar el nuevo año haciendo una recapitulación de un año tan difícil como 2020. Intentar responder a una pregunta crucial que yo mismo me hacía en plena crisis sanitaria: **¿hemos aprendido algo de la pandemia?** y que no parece que tenga una respuesta positiva a la luz de los acontecimientos posteriores. Ayuda en la reflexión, el recomendable ensayo del sociólogo y político de la izquierda belga, Peter Mertens: *Los olvidados* (Editorial Atrapasueños, Madrid 2020). Sigamos su ejercicio de pedagogía para razonar sobre qué nos está pasando y qué hacer.

Que un hombre se coma un animal exótico en un rincón del mundo y cien días después media humanidad esté confinada, demuestra lo interconectados que estamos y lo vulnerables que somos. Un virus microscópico ha golpeado al planeta como si fuera un meteorito. A estas alturas, hay cien millones de contagiados, más de dos millones de muertes y un 90% de los países del mundo sufren un serio retroceso en su economía, mucho mayor que el Gran Crack de 1929.

Y cuando la estructura de esta civilización se venía abajo como un castillo de cartas, aparecen los sanitarios, el personal de los cuidados, de la limpieza, los trabajadores de los supermercados, del transporte y la seguridad, el profesorado, los

empleados públicos, los repartidores, los trabajadores de las fábricas y del campo... y hacen que todo vuelva funcionar.

Cuando todo estaba oscuro fueron los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes quienes nos ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia. Como dice Mertens: "Las estrellas solo se ven en la oscuridad". Sin ellos nadie nos curaría, ni cuidaría, ni tendríamos qué comer, no estaríamos a salvo. La población ha tomado conciencia del carácter esencial de su trabajo, como expresaban los aplausos al personal sanitario.

Pero no son suficientes esos aplausos y el agradecimiento. Eso no llena las neveras, no asegura el empleo, no mejora sus condiciones de trabajo. Se mantiene una gran brecha entre la escasa consideración laboral de muchos de los trabajos (bajos salarios, precariedad...) y su importancia social real. Por eso tienen que plantarse. Un ejemplo, fue la protesta de las batas blancas en el mes de mayo, cuando la primera ministra belga Sophie Wilmès fue de visita al hospital Saint-Pierre de Bruselas. El personal sanitario, uno a uno, se fue girando a su paso y le dieron la espalda. Un acto de protesta de gran simbolismo porque, como dicen los sanitarios, "los políticos nos dan la espalda constantemente cuando les pedimos ayuda".

No han sido los especuladores financieros, los consultores, los charlatanes de todo tipo los que han hecho que las cosas funcionen, han sido aquellos desde hace tiempo no sabíamos quiénes eran y que antes llamábamos clase obrera. La pandemia ha puesto en evidencia que los trabajadores existen y son imprescindibles, que son los héroes en la crisis sanitaria, aunque el capitalismo les trate como si fueran chusma.

Pero, como dice Owen Jones, es evidente que el coronavirus es una cuestión de clase. Ello se ha



dejado de ver en las condiciones del confinamiento en las viviendas, la capacidad de atender a los niños, los riesgos obligados a asumir, el tipo de garantías de seguridad en el trabajo, la protección social, etc. No hay ninguna duda de que la pandemia se alimenta cuando las condiciones de vida y de trabajo son terribles.

Ello produjo auténticas revueltas, como la de los metalúrgicos italianos, en huelga para garantizar la seguridad y no ser carne de cañón. No hay que olvidar que los neoliberales más conspicuos se oponían a parar la producción para que "el remedio no fuera peor que la enfermedad" (Trump); consideraban que "no había lugar en el debate sobre el covid para las emociones (...) y que las flores marchitas se podan, quizá unos meses antes" (Marianne Zwagerman); o que el 99% de la población no se iba a sacrificar por el 1% (Ayuso).

Pero los ricos y grandes empresarios quieren volver a la anormalidad anterior, a aplicar las viejas mentiras neoliberales basadas en la explotación, la especulación y el negocio. Volver al "no hay dinero para" las pensiones, los servicios públicos, los salarios y condiciones de trabajo dignas, para luchar contra la pobreza. No hay que olvidar la cita de Marx de que "El Estado es el comité ejecutivo de la burguesía", algo que habrá recordado la izquierda en el Gobierno de coalición en España. Y que estará

presente a la hora de participar en las ayudas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y las condiciones que se pretenderán imponer. **¿Por qué se tienen que aceptar recortes sociales o la degradación del mercado de trabajo para recibir estos fondos?** Lo lógico sería aplicar limitaciones para recibir ayudas del Estado a las empresas que evaden impuestos, que contaminan, que deterioran las condiciones del empleo, que reparten dividendos, que discriminan a las mujeres... Ahora bien, todo es una relación de fuerzas.

Pero un gigante, la clase trabajadora, ha despertado. Los trabajadores que habían desaparecido como sujeto histórico han vuelto. Han mantenido el país en marcha y ahora deben recuperar su orgullo, la conciencia de su carácter indispensable, la confianza en sus propias fuerzas. Y, para ganarse el respeto, deben luchar. De lo contrario, los héroes de hoy, serán olvidados mañana si no se organizan y se movilizan para cambiar las cosas. Hoy tienen la autoridad que emana de sus actos: haber sacado adelante el país en unos momentos muy difíciles.

Los sindicatos también se deben levantar y ser capaces de resetearse para recuperar prestigio y la confianza de los trabajadores de toda condición. La defensa del empleo digno y de calidad pasa por derogar las últimas reformas laborales; una protección social adecuada supone mejorar

las pensiones y no admitir ningún tipo de recorte; fortalecer servicios esenciales como la sanidad y la educación pública exige más inversión; otro modelo productivo y más democracia en las empresas es un horizonte estratégico. Han anunciado movilizaciones para febrero, ojalá vayan en serio, porque ése es el camino.

Y, claro, que hay alternativas. Peter Martens recurre al *Green New Deal* de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez, inspirado en el *New Deal* con el que Roosevelt hizo frente a la Gran Depresión de los años treinta. Hace propuestas para afrontar las dos crisis: la económica y la climática. A través de un plan europeo de reconstrucción basado en inversiones públicas para que la transición ecológica y digital no quede en manos privadas. Se estructura en cuatro ejes estratégicos: la energía, el transporte, la transición digital y la sanidad. Creando grandes consorcios públicos europeos y apostando por un impuesto europeo sobre el patrimonio. Le da un nombre cargado de significado: Plan Prometeo, porque de eso se trata, de dar el fuego a la ciudadanía para que no tengan que inclinarse, para que lo usen para cubrir sus necesidades, y para que sea un fuego interior que los permita pensar, soñar y osar.

Pero el camino no será fácil, porque también advierte de la aparición de monstruos, como la ultraderecha y nuevas formas de autoritarismo. Con el discurso ramplón de "Nuestra gente primero", los que siembran el odio forman parte del problema y no de la solución. No hay que olvidar que el fascismo ha sido el recurso utilizado por las élites cuando ven en peligro sus intereses.

Con la pandemia hemos pasado del vivir de uno en uno, a necesitarnos los unos a los otros. Por ello, una cosa es evitar el contacto físico y otra el social. Y aunque la distancia física hay que mantenerla a metro y medio mientras dure la pandemia, no debe haber un milímetro de distancia social, porque eso significa interiorización y derrota. Hemos empezado a recuperar el principio sagrado de la solidaridad, que en tiempos de crisis es más importante que el dinero. No debemos olvidar ni dejar atrás nada ni a nadie. El futuro les pertenece a los que hacen que el mundo gire.

Fuente:

<https://www.cuartopoder.es/ideas/2021/01/22/las-estrellas-solo-se-ven-en-la-oscuridad/>



La Renta Básica, una alternativa inevitable a las políticas fallidas contra la pobreza

Sergi Raventós
Catalunya Plural
17/02/2021

Las políticas tradicionales para hacer frente a la pobreza hace años que han mostrado sus insuficiencias y limitaciones. Los datos en los diferentes informes y estudios nos muestran desde hace tiempo que son políticas fallidas en muchos aspectos. Es hora de avanzar y poner en marcha opciones de carácter transformador como la Renta Básica y garantizar unos ingresos para toda la ciudadanía, en un mundo lleno de incertidumbres y donde la inseguridad económica de buena parte de la población va en aumento.

Una vez finalizadas las elecciones del 14 de febrero, tal vez es bueno volver a aterrizar y recordar cuál es la dura realidad social, económica y sanitaria que nos está dejando la pandemia de la Covid19. Para hacer esto, he creído oportuno acompañarme de informes y documentos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos y más en los períodos electorales. Creo que es un buen momento volver a recuperarlos y sería deseable que se tomaran en serio tanto los datos que se exponen, como las recomendaciones que se hacen.

Empezamos con un documento de diciembre de 2020 de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) llamado "Una sociedad entre crisis", en el que se hace un exhaustivo análisis de los diversos indicadores sociales en Cataluña que puede dejar helado a cualquier persona que esté un poco despistada de la realidad social. Dicho texto nos dice que un 20% de la población catalana es pobre, que han aumentado un 30% las familias en situación de pobreza severa y casi una cuarta parte de la población catalana está en riesgo de pobreza o exclusión. También se expone en este trabajo que un 12,1% de las personas que trabajan son pobres, a pesar de tener un salario.

En relación a la salud en tiempos de pandemia, el porcentaje de percepción de mala salud se duplica entre las personas con trabajos no cualificados respecto al segmento con ocupaciones superiores (21% vs 10,4% entre los directores, gerentes y profesionales universitarios) y en cuanto a la salud mental también se detecta un aumento de malestar psicológico, un aumento de las patologías mentales

(un 31% de las mujeres de más de 65 años padecen depresión y un 11,5% sufren depresión mayor) a la vez que agravan las que ya existían y que el sistema ya de por sí deficitario no puede atender, con lo cual se acentúan aún más las desigualdades en salud.

En cuanto a la problemática de la vivienda, en nuestras sociedades se estima que las que viven de alquiler triplican el riesgo de pobreza un 35,5% respecto a las que viven en vivienda de propiedad, seguramente por tratarse de hogares ocupados por familias con menor poder adquisitivo y con trabajos temporales o poco remunerados. Hay que recordar que el paro es mucho más elevado entre la juventud, con una tasa que duplica los datos globales: más de un 35,6% en Cataluña de paro juvenil (de 16 a 25 años) según el Instituto Nacional de Estadística.

Para hacer frente a esta brutal realidad de pobreza en nuestro país y que hace años que arrastramos, una de las medidas que existe en Catalunya desde el 2017 es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) una prestación social económica y de percepción periódica otorgada por la Generalitat de Catalunya que tiene el objetivo de asegurar "los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad".

La RGC, a tres años desde su aprobación, sigue siendo una prestación desconocida por el 60% de los hogares atendidos por Cáritas de Barcelona y que hay que sumar a las 23,4% que no tienen derecho por los requisitos y al 3,5% que no sabe cómo pedirla por la complicada trama burocrática existente,

según un informe reciente de esta entidad de enero de 2021 y se calcula que sólo la han pedido menos de un 10% de las personas que tienen derecho. ¿A que sería debido este fracaso? Según la gente que trabaja sobre el terreno ayudando a las personas a tramitar esta prestación, enumeran los siguientes motivos: unos criterios rígidos de acceso, requisitos demasiado restrictivos, una excesiva burocracia y un desconocimiento de cómo acceder a pedirlo... En definitiva, los viejos problemas ya conocidos y recurrentes de las prestaciones condicionadas.

Como es sabido, desde junio de 2020 y después de transcurridos tres meses de la declaración del estado de la alarma por la pandemia de Covid19, el gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que a día de hoy y según este citado informe de Cáritas, el 63,9% de las personas atendidas por esta entidad lo desconocían. Se calcula que a diciembre de 2020 sólo unos 160.000 hogares de todo el Reino de España han recibido el IMV. Esto, hay que recordar, es una quinta parte del objetivo que se propuso el "Gobierno de España" que era llegar a unas 850.000 familias en situación de extrema pobreza, una cifra que ya se consideró excesivamente escasa en su momento. Quizás hay que recordar que el año 2019 (veremos cuando salgan datos de 2020) eran 10 millones el número de personas pobres en el Reino de España, de los cuales 1,5 millones viven en Cataluña.

¿A qué sería debido estos escasos resultados? una vez más: restricciones en el acceso, dificultades de tramitación, lentitud en la respuesta y el bajo índice de concesión de la ayuda. Y también podríamos añadir la obsesión por parte de los administradores de que no se cometa el error del falso positivo, que nadie que lo reciba no merezca recibirlo, a cuenta de cometer muchos casos el falso negativo: muchos que no pasan la prueba y deberían hacerlo.

Es, por todo ello, que desde ECAS, en el citado documento, se dice que "la actual crisis sanitaria y social impacta en una sociedad polarizada, débil y frágil. A los problemas crónicos se ha añadido la extraordinaria coyuntura de una pandemia en la que se ha respondido con medidas de urgencia, asistenciales y reactivas que no atacan las causas estructurales que hay que transformar."

No quería terminar sin nombrar el último informe de Oxfam, publicado en enero de 2021, que lleva el significativo título: *El virus de la desigualdad* y

como es habitual en estos informes se dan muchos datos escalofriantes de las grandes desigualdades a escala planetaria. Por ejemplo: casi la mitad de la humanidad ha de sobrevivir con menos de cinco dólares y medio al día mientras la fortuna de las 10 personas más ricas creció en 540.000 millones de dólares entre marzo y diciembre de 2020. También informa que unos 4000 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, no cuentan con ninguna cobertura de protección o asistencia social en la pandemia.

Pero esta vez, a diferencia de los anteriores informes de Oxfam, se destaca que "después de la pandemia el mundo será distinto y las políticas de justicia social y carácter transformador que eran impensables antes de la crisis se han convertido en una opción posible", también se dice en el mismo "que ha cambiado la prioridad de las personas de cara al futuro y que hay un amplio apoyo a las políticas que quieren transformar la sociedad tales como: las subidas de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, las transferencias de efectivo en situaciones de emergencia como la actual, la Universalidad de los servicios públicos incluyendo la atención médica, la reducción del poder de las grandes empresas, el fortalecimiento de las personas trabajadoras y consumidoras, la inversión en una recuperación económica verde y... la Renta Básica Universal."

La Renta básica universal e incondicional ya ha dejado de ser una propuesta desconocida desde hace tiempo y ha pasado a formar parte de las medidas necesarias e imprescindibles que hay que poner en marcha lo antes posible si queremos detener el aumento de la pobreza y poner freno a las grandes desigualdades sociales y económicas que atraviesan nuestras sociedades. Garantizar unos ingresos a todos, sin condiciones y en tiempo de incertidumbre económica ya es una cuestión de emergencia en todo el planeta.

Fuente:

<https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-una-alternativa-inevitable-a-las-politicas-fallidas-contra-la-pobreza/>

- ➔ **La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala será la primera mujer en dirigir la Organización Mundial del Comercio.** El Mercurio Digital. 15/02/2021. La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue elegida el lunes 15 de febrero directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que se convertirá en la primera mujer al frente de este organismo. Okonjo-Iweala, nacida en 1954, es además el primer dirigente africano en presidir la organización, liderada en los pasados siete años por el brasileño Roberto Azevedo.

<https://www.elmercuriodigital.net/2021/02/la-nigeriana-ngozi-okonjo-iweala-sera.html>

- ➔ **Activos soberanos como garantía de compra: las insólitas exigencias que Pfizer habría puesto a los Gobiernos de América Latina para venderles vacunas.** Russia Today. 24/02/2021. La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos, según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público. Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19. La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una "intimidación de alto nivel".

<https://actualidad.rt.com/actualidad/384524-exigencias-pfizer-latinoamerica-vacunas>

- ➔ **"Las políticas del gobierno turco contra las mujeres son crímenes de guerra", Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.** Barómetro Latinoamericano. 01/03/2021. El Movimiento de Mujeres de Kurdistán lanzó una campaña

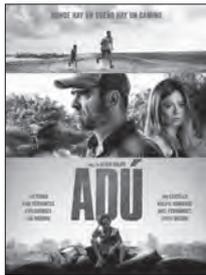
internacional para denunciar los feminicidios cometidos por el régimen turco, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Melike Yasar, representante del movimiento, aseguró que "él es el principal perpetrador de los crímenes" contra las mujeres. El Movimiento de Mujeres Kurda de Europa (TJK-E, por sus siglas originales) lanzó en noviembre pasado la campaña internacional 100 Razones para juzgar al dictador, con la cual buscan recolectar 100 mil firmas para llevar al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ante los tribunales internacionales.

<https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2021/02/las-politicas-del-gobierno-turco-contr.html>

- ➔ **Trabajadores cristianos de Huelva critican la "indolencia y pasividad" en el incendio del asentamiento de personas migrantes.** Noticias Obreras. 20/02/2021. Trabajadores cristianos de Huelva, ante un nuevo incendio en un asentamiento de migrantes en la provincia, han denunciado "la indolencia y la pasividad de las instituciones públicas y de los empresarios que siguen negando a estos trabajadores y trabajadoras lo que por derecho les corresponde". El asentamiento donde vivían unas 800 personas migrantes en las afueras de Palos de la Frontera (Huelva) ha quedado reducido, en parte, a cenizas, tras un nuevo incendio que se propagó con rapidez, en la madrugada del viernes 19 de febrero. Iglesia por el Trabajo Decente y El Secretariado Diocesano de Migraciones, denuncian en un comunicado "la situación en la que malviven quienes están en estos asentamientos, produciendo una gran riqueza económica a empresarios y a municipios que gozan de un importante superávit". Según su declaración pública, "estas personas trabajadoras se ven obligadas a vivir de manera inhumana, arriesgando cada día su salud y su propia vida", por no hablar de que así, "se les está negando el auxilio a que tiene derecho cualquier ser humano en situaciones similares".

https://www.religiondigital.org/solidaridad/Trabajadores-cristianos-Huelva-indolencia-asentamiento-palos-frontera-inmigrantes-trabajo-digno_0_2316068393.html

Reseña Cine



ADÚ

Dirección: Salvador Calvo

Nacionalidad: España

Año: 2020

Sinopsis

La película nos cuenta tres historias diferenciadas pero con un punto en común: la pobreza de África y la situación tan extrema en la que se encuentran las personas que viven allí. Al intentar llegar a Europa, un niño pequeño y su hermana mayor están agazapados en un aeropuerto, a la espera de poder introducirse en las bodegas de un avión y escapar del continente. Mientras tanto, un activista medioambiental tendrá que luchar contra la caza furtiva de animales, a la vez que lucha también con los problemas de su hija. Por otro lado, un grupo de guardias civiles afrontará su día a día con la cantidad de personas que intentan saltar la valla en Melilla, en un intento por escapar de sus vidas en el continente africano y encontrar un lugar mejor en el que vivir. 'Adu' es una película que intenta mostrar la inmigración ilegal desde el punto de vista de las personas que lo sufren.

Lo mejor de la propuesta

La película Adú del director Salvador Calvo llega a la cartelera para hacernos reflexionar sobre el drama humanitario de la inmigración. De la mano de un niño de seis años camerunés recorreremos África con la esperanza de alcanzar la tierra prometida: España. Adú es uno de esos inmigrantes que con tan sólo seis años se juegan literalmente la vida cruzando África y luego el Mediterráneo, porque en su pequeña aldea no queda nada... y nada significa no tener ni siquiera la esperanza de sobrevivir un amanecer más por culpa de las mafias o el hambre. Cuando te quitan lo más básico, el derecho a la vida, sólo te queda una vía: activar el mecanismo de supervivencia que todos llevamos dentro y que te puede llevar a jugarle la vida en una patera o a saltar como puedas una alambrada llena de pinchos y policía. La desesperación por sobrevivir, no hay más.

Quizá aquí, en los países ricos, o eso nos creemos, nos cueste ponernos en la piel de esos inmigrantes porque estamos demasiado aletargados en nuestra acomodada forma de vida, invadidos por discursos políticos de odio, y sumidos en el lema de "no podemos hacer nada". Pero, ¿sí una película te mostrara en dos horas de metraje dos historias reales como las de Adú y Massar?... La reflexión es inevitable y eso, precisamente es lo mejor de la propuesta de su director Salvador Calvo. La triple trama que plantea Adú nos irá adentrando en una realidad que, pese a tener muy cerca y continuamente en las noticias, parecemos distantes a ella. Quizá

los medios de comunicación y los políticos ya se han encargado de ir poco a poco haciéndonos inmunes a una realidad que vista de frente espanta.

¿De qué va Adú?

Por un lado, nos adentraremos en África con la historia de Adú y Massar (Moustapha Oumarou y Adam Nourou), en la que les acompañaremos desde su huida de Camerún en su intento desesperado por llegar al monte Gurugú; por otro, la relación paternofamiliar entre un activista medioambiental preocupado por salvar elefantes en una reserva y su descarriada hija (Luis Tosar y Anna Castillo); y por último, la labor realizada por tres policías españoles en la polémica valla de Melilla (Álvaro Cervantes, Jesús Carroza y Miquel Fernández).

¿El porqué de estas tres historias?

Salvador Calvo elige contarnos estas tres tramas de manera entrelazada con un propósito: hacernos ver tres realidades completamente diferentes sobre un mismo tema que llevarán al espectador a reflexionar sobre varios aspectos de la cinta durante los días posteriores a su visionado. Es imposible que la historia de Adú y Massar deje indiferente a nadie.

Los problemas del Primer Mundo...

La trama que casi llegará a "molestar" será la protagonizada por Luis Tosar y Anna Castillo, dos grandes actores que en la que nos ocupa no tienen lugar para lucirse. Su trama está pensada para resultar un contrapunto necesario a la de los dos jóvenes cameruneses. Sus personajes plantean los típicos problemas superfluos del denominado Primer Mundo, que sí bien son las típicas "tonterías" que nos preocupan a todos a diario y que tendrían una solución tan rápida como una mera conversación, quedan sumidos en la ridiculez más absoluta al enfrentarse directamente con la historia de estos dos chicos que huyen del infierno.

Adú y Massar, la fuerza del relato

Aunque comprendamos las razones de su director para hacernos ver estas tres realidades al mismo tiempo, el espectador se quedará con ganas de ver y conocer más sobre la historia de Adú y Massar. Llegando incluso a ensuciar el relato cuando la cinta se centre en las otras dos historias. Está claro dónde está la fuerza del argumento de la película, y de sus interpretaciones.

Las interpretaciones de dos jóvenes descubrimientos

Y es que Moustapha Oumarou y Adam Nourou resultan los dos grandes descubrimientos de la película. La fuerza de sus interpretaciones aporta un realismo tal a la cinta que por momentos nos encontraremos inmersos en un documental y no en una cinta de ficción.

Opinión final de la película Adú

La película Adú es una de esas propuestas necesarias en la cartelera. Nos plantea un relato sólido y lleno de fuerza, sobre todo cuando se centra en la historia de Adú y Massar. Es literalmente imposible que su historia no impacte en el espectador y nos haga reflexionar sobre nuestro acomodado modo de vida y sobre el drama humanitario que viven millones de personas de las que sólo nos separa el Mediterráneo.

<https://losinterrogantes.com/cine/criticas/pelicula-adu>

Colette Kitoga "Madre de huérfanos y viudas"



Bartolomé Burgos
África Fundación Sur
06/03/2020

Inicio

Colette Kitoga nos introduce en su vida con estas palabras: "Vengo de una familia necesitada. Siendo niña vi morir a mi hermanita de sarampión. Desde entonces siempre he querido salvar vidas". Nació en la década de los cuarenta, en Bukavu, ciudad del Sur del Kivu (RD del Congo) colindante con Ruanda. A los 14 años, viajó a Italia en compañía de una misionera, "con la idea –nos dice Colette– de hacerme religiosa. En Italia hizo los cursos de educación intermedia y el bachiller. Las religiosas esperaban que estudiase teología pero ella se negó, ya que su verdadera aspiración era estudiar medicina. Este cambio de perspectiva decepcionó fuertemente a la religiosa que había sido su protectora. En palabras de Colette: "aquella hermana y yo nos separamos de mala manera, porque ella había puesto en mi todas sus esperanzas y yo la había decepcionado, como podría hacer un hijo con sus padres. Sólo recientemente nos hemos reconciliado, (2012) fue un momento muy intenso y conmovedor".

Su estancia en Europa duró unos 20 años, dedicada al estudio y al trabajo. Estudió medicina en la universidad católica de Roma. En la universidad de Ginebra se especializó en sanidad pública y desarrollo. También estudió bioética, medicina tropical y psicoterapia infantil y femenina.

Mater Misericordiae

Después de pasar tantos años en Europa, Colette volvió a su ciudad natal de Bukavu, allá por los años 80. Comenzó trabajando en el hospital local, donde las condiciones de trabajo eran deplorables. En la maternidad, muchas madres morían al dar a luz, pues las traían al hospital en estado grave,

cuando el parto en casa resultaba imposible. Los recién nacidos se encontraban huérfanos y sin protección, ya que el hospital no podía hacerse cargo de ellos. La Dra. Kitoga decidió tomar el asunto en mano y, en 1995, alquiló un apartamento en Bukavu, donde albergó a siete pequeños, decidida a ocuparse de ellos con la colaboración de dos enfermeras voluntarias. "Muchas madres –nos dice la Dra. Colette– morían al dar a luz, así que pronto me encontré con quince recién nacidos en mis brazos. Ni siquiera tenía leche para alimentarlos; decidí, pues, confiarlos a diferentes familias para que se ocuparan de ellos.

"Un día –cuenta Colette Kitoga– vino a mí una señora, con unos veinte niños, entre seis y quince años, y me dijo: 'Doctora usted quería hacer el orfanato, pues aquí le traigo los huérfanos'. Me quedé con aquellos niños durante un año y este fue el comienzo de "Mater Misericordiae". El apartamento se convirtió en una guardería, con bebés recién nacidos y niños pequeños, que buscaban refugio escapando de la barbarie.

Así fue como, gracias a la ayuda de algunos amigos italianos y a la colaboración de numerosas familias, surgió en centro Mater Misericordiae.

La guerra

Esto ocurría en octubre de 1996, poco antes del inicio de la segunda guerra del Congo que cambió dramáticamente la situación. Bukavu, ciudad fronteriza con Ruanda, fue una de las primeras invadidas y conquistadas. La invasión provocó numerosas muertes, entre ellas la de Monseñor Christophe Munzihirwa, arzobispo de la ciudad. Por todas partes había cadáveres, y el centro de acogida de la Doctora Colette se vio rápidamente inundado por niños traumatizados. Algunos habían visto asesinar a sus padres y las niñas habían sido violadas en su





niñez. Otros contaban como habían visto enterrar a personas vivas; hubo quien vio como cortaban la lengua a su padre, le sacaban los ojos y violaban a su madre en su presencia. Estos niños se convirtieron en testigos molestos, a quienes se intentaba neutralizar, por lo que tenían que ser protegidos.

Mater Misericordiae acogió también a chicas y mujeres violadas por criminales que utilizaban la violación como arma de guerra. Colette quiso proteger de la estigmatización a que se verían sometidas las mujeres violadas. En el Centro se les llama viudas para evitar la discriminación. "Son viudas con marido", dice Colette sonriendo.

La situación de Mater Misericordiae se agravó con el aflujo de los niños soldados. Al comienzo de la invasión, Kabila, el padre, había prometido 200 dólares a cuantos se incorporaran a las tropas invasoras. Muchos niños, obnubilados por la promesa de tanto dinero, escaparon de sus familias para alistarse en el ejército. Algunos murieron y otros desertaron los campos de batalla y buscaron refugio en el centro de la Dra. Colette, ya que no podían volver a sus familias porque éstas estaban vigiladas. Acoger a estos niños prófugos era peligroso: si capturaban alguno, fusilaban a toda la familia que los había protegido. Aún así, numerosas familias se arriesgaron a ocultarlos y protegerlos. Con el tiempo, Unicef fue autorizada a desmovilizar a estos niños soldados y fue entonces cuando la Dra. Colette pudo ocuparse de ellos oficialmente, a pesar de ser muy numerosos.

Oficiales de ejército habían sospechado de la Dra. y registraron el Centro, acusándola de proteger al enemigo. El enemigo eran estos niños convertidos en testigos incómodos o escapados del frente. Sus perseguidores eran soldados de la Coalición Democrática Congoleña, que incluía tutsis del ejército ruandés presentes en el Congo, el ejército hutu, desparramado en campos a través del Congo oriental y supervivientes de las tropas de Mobutu. Miembros del ejército controlaron a la Dra. Colette, la interrogaron y la espionaron. Cuando ayudó a escapar a un niño y a su madre, que debía ser sepultada

viva, la Doctora tuvo que huir a Nairobi y más tarde ocultarse en Kinshasa.

Terapia

Con el tiempo, el Centro Mater Misericordiae, que había comenzado en Bukavu, extendió sus actividades a otras dos localidades: Uvira, cerca de la frontera burundesa y Kamituga, en zona rural, administrados por enfermeras voluntarias y psicoterapeutas. En total, los Centros acogen a unos 2.800 niños, entre huérfanos, ex-niños soldados y mujeres víctimas de violaciones. La Dra. Kitoga también recurre a familias acogedoras, en quienes puede confiar, para hospedar a estos niños y que puedan así integrarse en la sociedad. Se procura que las familias acogedoras tengan contacto con las familias reales de los niños. Si éstos no tienen familia, se procura relacionarse con miembros de sus tribus de origen, para que no se sientan perdidos.

El Centro ofrece cuidados médicos generales y psicoterapia a los niños (el 85% de los residentes) y a las jóvenes violadas, ayudándoles a superar los horrores sufridos. Allí, huérfanos y niños soldados viven juntos para rehabilitarse. Al comienzo, la convivencia era muy difícil. Los niños nunca miraban a la cara de la persona que les estaba dirigiendo la palabra; no hablaban ni sonreían. Casi todos tienen amargas experiencias de los adultos, por eso es esencial ganarse su confianza, aún pidiéndoles perdón por los sufrimientos que los adultos les han causado. La sonrisa en sus labios es el primer indicio de recuperación.

Con el tiempo, la situación de estos niños ha mejorado mucho. Los mayores ayudan a los más pequeños y los van mentalizando y, así, se van serenando. Los que saben leer y escribir enseñan a los que no saben. Algunos ya se han independizado; han iniciado, por ejemplo, algún pequeño negocio, han abierto restaurantes locales o han aprendido a coser y reparar ropa de vestir. Algunos han llegado incluso a cursar estudios universitarios y no se olvidan de echar una mano a sus compañeros de antaño, cuyas tragedias compartieron. El número de los residentes de los Centros desde los inicios puede ascender a unos 5.000. Para todos ellos, la doctora Colette es la madre de viudas y huérfanos, a pesar de que ella misma nunca fundara una familia.

Esta mujer extraordinaria, que ya ronda los setenta años, recibió el reconocimiento del Premio UNICEF 2005 por su trabajo con los niños en el Centro Mater Misericordiae. Pero sin duda, el mayor reconocimiento de su incansable dedicación es el amor y la gratitud de todas estas personas para quienes ha sido y sigue siendo la Madre de viudas y huérfanos.

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA

LIBROS

2. *La Misa sobre el Mundo y otros escritos*. Teilhard de Chardin. 4 €.
5. *El personalismo*. Emmanuel Mounier. 4 €
7. *Plenitud del laico y compromiso: Sollicitudo Rei Socialis y Christifideles Laici*. Juan Pablo II. 4 €
8. *El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e ideales*. Guillermo Rovirosa. 4 €.
11. *Sangradouro*. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 €.
12. *El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista*. José Luis Rubio. 4 €.
13. *Fuerza y debilidades de la familia*. J. Lacroix. 4 €.
14. *La Comisión Trilateral. El gobierno del mundo en la sombra*. Luis Capilla. 4 €.
15. *Los cristianos en el frente obrero*. Jacinto Martín. 5 €
16. *Los Derechos Humanos*. A.C.C. 4 €.
17. *Del Papa Celestino a los hombres*. G. Papini. 4 €.
18. *La teología de Antonio Machado*. J.M. González Ruiz. 4 €.
19. *Juicio ético a la revolución tecnológica*. D.A. Azcuy. 4 €.
20. *Maximiliano Kolbe*. C. Díaz. 4 €.
22. *Dar la palabra a los pobres*. Cartas de Lorenzo Milani. 4 €.
23. *Neoliberalismo y fe cristiana*. P. Bonavia y J. Galdona. 4 €.
24. *Sobre la piel de los niños*. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 €.
25. *Escritos colectivos de muchachos del pueblo*. Casa Escuela Santiago I. 4 €.
26. *España, canto y llanto. Historia del Movimiento Obrero con la Iglesia al fondo*. Carlos Díaz. 10 € .
27. *Sur-Norte*. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 €.
28. *Las multinacionales: voraces pulpos planetarios*. Luis Capilla. 4 €.
29. *Moral social. Guía para la formación en los valores éticos*. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 €.
30. *Cuando ganar es perder*. Mariano Moreno Villa. 4,5 €.
31. *Antropología del Neoliberalismo. Análisis crítico desde una perspectiva católica*. Javier Galdona. 4 €
32. *El canto de las fuentes*. Eloi Leclerc. 4 €.
33. *El mito de la globalización neoliberal: Desafíos y respuestas*. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 €.
34. *La fuerza de amar*. Martin Luther King. 4,5 €.
36. *Aunque es de noche*. J. M. Vigil. 4 €.
37. *Grupos financieros internacionales*. L. Capilla. 4 €.
38. *En vigilante espera*. ACC. 4,5 €.
39. *El otro: un horizonte profético*. E. Balducci. 4 €
40. *Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo*. A. Colomer. 4 €
42. *Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis crítico del voluntariado y las ONGs)*. Ana M^a Rivas Rivas. 4 €
43. *Giorgio La Pira*. E. Balducci. 4 €
44. *La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?*. Antonio Andrés. 4 €
45. *Pensar a Dios desde el reverso de la historia El legado teológico de Gustavo Gutiérrez*. Juan Pablo García Maestro. 5 €
46. *Caminos de encuentro*. Elena Oyarzábal. 4,5 €
47. *El futuro del diálogo interreligioso*. J. P. García Maestro. 5 €
48. *¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad?*. Luis Razeto Migliaro. 5 €
49. *Confesión de fe*. Frumen Escudero. 4 €

Libros fuera de suscripción: Todos a 4 €

- *Gandhi*. Esperanza Díaz
- *Martin Luther King*. E. Buch
- *Teresa de Calcuta*. Javier García Plata-Polo
- *Concepción Arenal*. Ana Rivas
- *Carlos de Foucauld*. J. L. Vázquez Borau
- *Ángel Pestaña*. Antonio Saa
- *Emmanuel Mounier*. Carlos Díaz.
- *Nikolái A. Berdiáev*. M. L. Cambronero
- *Diego Abad de Santillán*. F. Pérez de Blas
- *Guillermo Rovirosa*. Carlos Díaz
- *Flora Tristán*. Nieves Pinillos
- *Paulo Freire*. Luis Enrique Hernández
- *Gabriel Marcel*. F. López Luengo
- *Dietrich Bonhoeffer*. Emmanuel Buch Camí
- *Ignacio Ellacuría*. José L. Oriente Pardillo
- *Lorenzo Milani*. Guillermo García Domingo
- *Matin Buber*. Carlos Díaz.
- *Giner de los Ríos*. José Luis Rozalén
- *Edith Stein*. Inés Riego
- *Charles Peguy*. Juan Carlos Vila
- *Simone Weil*. Carmen Ibarlucea
- *Andrés Manjón*. José Medina

CULTURA PARA LA ESPERANZA

Instrumento de análisis de la realidad de Acción Cultural Cristiana. Revista trimestral (3 números al año). 2,5 €/número.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN

Suscripción a 3 revistas al año por el precio de 10 €, más 6 € de gastos de envío si se recibe por correo. Total 16 €

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

C.P.:

TELÉFONO:

PAGO: Transferencia a la cuenta ES04-1550-0001-230000731828 de Acción Cultural Cristiana

Contacto: A.C.C. C/. Sierra de Oncala 7, bajo 2.
28018 Madrid. Teléf.: 630754424

<http://www.accionculturalcristiana.org>